

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 38 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 17º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-12049-2020
CARATULADO : VERA/FISCO DE CHILE / CDE

Santiago, veintiocho de Octubre de dos mil veintidós

Vistos:

A través de presentación ingresada por Oficina Judicial Virtual con fecha 11 de agosto de 2020, comparece don Víctor Rosas Vergara, abogado, domiciliado en Phillips N° 16, quinto piso, oficina Y, comuna de Santiago, en representación de don **Gonzalo Ananías González Vargas**, cédula de identidad N° 4.720.446-1, profesor, domiciliado en Guldagervej 163, Faxe, Dinamarca; de don **Miguel Ángel Ruiz Henríquez**, cédula de identidad N° 5.939.614-5, contador público auditor, domiciliado en Angamos 557, Punta Arenas; de don **Rolando Jacobo Neira Gavilán**, cédula de identidad N° 3.564.833-K, contador auditor, domiciliado en Parlamento de Negrete N°63, Villa San Pedro, comuna San Pedro de la Paz; de don **Jovino Guala Sánchez**, cédula de identidad N° 3.529.951-3, mecánico, domiciliado en Balmaceda 696, Punta Arenas; de don **Antonio Rafael Bianchi Panicucci**, cédula de identidad N° 4.429.156-8, jubilado, domiciliado en José Miguel Carrera 641, Punta Arenas; de don **Liborio Barrientos Oyarzún**, cédula de identidad N° 4.570.245-6, gasfiter, domiciliado en Patagona N°1598, Punta Arenas; de don **Sergio Alfonso Barría Barría**, cédula de identidad N° 5.155.106-0, empleado, domiciliado en Enrique Abello 1065, Punta Arenas, y de don **Héctor Manuel Vera Cárdenas**, cédula de identidad N° 6.176.376-7, jubilado, domiciliado en Piedra del Sol N°377, Valle La Piedra, comuna San Pedro de la Paz, quien interpone en juicio de hacienda, demanda de indemnización de perjuicios en sede extracontractual en contra del Fisco de Chile, Rut N° 61.006.000-5, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Tras exponer el contexto de la dictadura iniciada el 11 de septiembre de 1973, relata que los hechos expuestos corresponden en esencia a los ya relatados por los propios querellantes y víctimas ante la Comisión Valech I, que los reconoció como víctimas de tortura. Señala que, en la provincia de Magallanes, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) estaban coordinadas y subordinadas en una estructura militar única llamada Región Militar Austral (RMA) desde hacía varios años. La RMA era comandada por la V División de Ejército cuyo mando lo ejercía el General Manuel Torres de la Cruz desde el año 1971. Las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas en la región también se coordinaron bajo la estructura



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHCXHJPX

«RIT»

Foja: 1

única del Servicio de Inteligencia de la Región Militar Austral (SIRMA). El SIRMA coordinaba las actividades del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y del Servicio de Inteligencia Naval (SIN).

Expresa que, con varios meses de anticipación al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas comenzaron los preparativos de éste y a planificar y diseñar las tareas de represión de los opositores en la Provincia de Magallanes. Así, los servicios de inteligencia institucionales recogieron información sobre los funcionarios públicos del gobierno de la Unidad Popular, de los dirigentes políticos, estudiantiles y sindicales y de las personas que apoyaban o simplemente simpatizaban con el gobierno constitucional.

Refiere que, por lo tanto, al producirse el golpe militar, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas tenían consolidada la información a partir de la que habían determinado a quienes se debía perseguir, detener, encarcelar, torturar y asesinar. Lo anterior incluyó la elaboración de un plan de acción para cada rama de las Fuerzas Armadas. Así, el plan de la Armada se denominó “Plan Martillo”; el de la FACH “Plan Tijera” y el del Ejército “Plan Australis”. Mediante estos planes se distribuyó a cada rama de las FF.AA. los grupos de personas que les correspondía perseguir y detener según su afiliación a un determinado partido político, además de definir los lugares de encarcelamiento y los centros de interrogatorios clandestinos en que éstos serían confinados y que se establecerían en la zona. Dichos planes diseñados con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, sin duda contemplaban la aplicación sistemática de torturas y el sometimiento de los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según queda de manifiesto por la implementación de tales prácticas desde las primeras horas del golpe en los distintos centros de detención.

Asevera que Magallanes era considerada una zona de importancia estratégica para el país, por lo que en la ciudad de Punta Arenas se concentraban varios regimientos, unidades navales y unidades de la Fuerza Aérea, entre los que cabe mencionar el Regimiento de Infantería Motorizada Pudeto, el Regimiento Telecomunicaciones, el Regimiento Blindado René Schneider (Ojo Bueno), el Destacamento de Infantería de Marina Cochrane, las instalaciones de la Fuerza Aérea en Bahía Catalina, instalaciones de Río de los Ciervos, el Estadio fiscal de Punta Arenas, y en otros lugares de la provincia como el Regimiento Caupolicán en Porvenir y el Regimiento Lanceros en Puerto Natales.

Afirma que el 11 de septiembre de 1973, las fuerzas de la Región Militar Austral (RMA) implementaron el golpe militar en la provincia de Magallanes de acuerdo a sus respectivos planes de acción, a saber los planes “Martillo”, “Tijera” y “Australis”. El mismo día del golpe se estableció en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHXCXHJPX

Foja: 1

Magallanes una Junta Militar de Gobierno Provincial, encabezada por el General de Ejército Manuel Torres de la Cruz y compuesta además por el Almirante de la Armada, Horacio Justiniano Aguirre, y el General de la Fuerza Aérea, José Berdichewsky Scher. Al respecto, el General en retiro Manuel Torres de la Cruz, refiriéndose a la implementación del Golpe de Estado en la provincia declaró al Diario “El Magallanes” lo siguiente: *“Aquí se elaboró un plan de acción. Así como los marinos tenían el plan Martillo, y en la III División había un plan Tijera, aquí, en la V División se llamaba plan Australis. Este tenía un anexo de inteligencia en el cual con profundo estudio, profunda calma, con gran detenimiento y con gran acuciosidad, se estableció qué personas era necesario detener el día que se produjera el pronunciamiento, para evitar que cometieran desmanes. Y toda esa gente, a partir del 11 de septiembre, fue detenida y confinada en centros de detención, que no eran de tortura, en bahía Catalina por parte de los aviadores, en Río de los Ciervos por parte de los marinos y en el Regimiento Pudeto, por parte del Ejército”*. (Diario “El Magallanes”, 31 de Diciembre de 2000).”

Menciona que, posteriormente, al crearse la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por Decreto N°521 de 14 de junio de 1974, los partidos de la Unidad Popular en Magallanes ya habían sido desmantelados por los servicios de inteligencia de la Región Militar Austral (RMA) y la mayor parte de su dirigencia y militancia activa se encontraba detenida en distintos campos de concentración, mientras otros habían sido procesados por Consejos de Guerra, y el resto había sido relegado o había salido al exilio. La DINA en la provincia de Magallanes se conformó básicamente por el mismo personal de inteligencia militar que había implementado la represión hasta ese entonces en la provincia. Desde fines de 1974 hasta 1977, la Fiscalía Naval asumió la jurisdicción militar y la coordinación con la DINA en lo relacionado a la represión y encarcelamiento de los condenados por Consejos de Guerra.

Bajo el subtítulo “detenciones ilegales y torturas”, relata que en la madrugada del 11 de septiembre de 1973 se movilizaron las unidades militares de Punta Arenas y ocuparon toda la ciudad desplegando equipo de guerra, incluyendo tanquetas y camiones con metralletas, cerrando las salidas de la ciudad, ocupando el puerto, el aeropuerto y la salida de la península Brunswick. Al mismo tiempo, todos los medios de comunicación social fueron ocupados e intervenidos, como también las sedes de los partidos políticos, de las organizaciones sindicales, la Universidad Regional, los centros de trabajo e incluso las escuelas secundarias.

Señala que ese mismo día se declaró estado de sitio con toque de queda a partir de las 18:00 horas y se establecieron patrullajes, diurnos y nocturnos, en todas las poblaciones, los que tenían autorización para utilizar



Foja: 1

sus armamentos y fuerza letal para imponer el estado de sitio a la ciudadanía. Afirma que, a pesar de que en Punta Arenas no hubo enfrentamiento ni resistencia civil de ninguna especie para hacer frente al golpe militar, personal de los servicios de inteligencia de las distintas ramas de las FF.AA. procedieron inmediatamente a detener a centenares de personas -las que habían sido previamente identificadas-, mediante allanamientos masivos en los domicilios de los dirigentes sociales y de los militantes de los partidos de la Unidad Popular. Asimismo, a cualquier hora se realizaban operaciones rastrillo para buscar documentación y armas que supuestamente estarían escondidas en las poblaciones de la ciudad pero que nunca fueron encontradas.

Expresa que, en síntesis, Punta Arenas se transformó en una ciudad bajo estado de sitio, donde circulaban patrullas compuestas de militares y agentes civiles que buscaban a personas determinadas para detenerlas o secuestrarlas y conducir las a lugares de detención clandestinos, bajo jurisdicción militar, donde desde el mismo 11 de septiembre se aplicaron torturas contra las personas.

Asevera que el mismo 11 de septiembre de 1973, los mandos militares ordenaron a los medios de comunicación intervenidos difundir un extenso listado de personeros gubernamentales, de dirigentes políticos, militantes y líderes sociales afines al gobierno de la Unidad Popular para que concurrieran a entregarse a las Fuerzas Armadas. La primera lista fue publicada en el diario “La Prensa Austral” de Punta Arenas, el 12 de septiembre de 1973. Posteriormente otras listas con nombres adicionales fueron publicadas y difundidas en el mes de septiembre de 1973. Asimismo, se distribuyeron posters y afiches con fotografías de personas buscadas. En definitiva, la mayor parte de la dirigencia de los partidos políticos y las autoridades de gobierno de la Unidad Popular fue secuestrada o detenida durante la primera semana del golpe militar, ilegalmente, esto es, fuera de los casos previstos en la ley y en virtud de órdenes de autoridades militares que no tenían facultades legales para disponer la detención de personas.

Detalla que las personas detenidas o secuestradas fueron confinadas en diversos recintos militares y campos de concentración de la provincia de Magallanes donde se establecieron 34 centros de detención. Los principales centros de detención fueron los Campos de concentración de COMPINGIM y Río Chico en Isla Dawson, el Regimiento de infantería motorizada Pudeto, el Destacamento de infantería de marina Cochrane, el Batallón Blindado General Schneider (Ojo Bueno), Bahía Catalina y el Estadio Fiscal.

Refiere que el principal centro de interrogatorios y torturas fue el antiguo Hospital Naval, también conocido con el siniestro nombre de “El Palacio de la Risa”, recinto donde los prisioneros políticos eran interrogados



Foja: 1

y torturados cruel y salvajemente. Aquí el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) tuvo un rol preponderante coordinando sus labores represivas con las fiscalías de las Fuerzas Armadas, principalmente con la Fiscalía Militar y la Fiscalía Naval.

Expresa que en los distintos campos de concentración y centros de detención que se establecieron en la provincia de Magallanes, los detenidos y prisioneros políticos fueron sometidos a un riguroso sistema de castigos y torturas físicas, sexuales y psicológicas. Además, todos los detenidos y prisioneros políticos fueron sometidos rutinariamente a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como obligarlos a desnudarse y permanecer así durante largos períodos, práctica que no sólo constituye un atentado al pudor y una humillación sexual, una tortura psicológica, sino que también debe ser considerada como una forma de tortura física, dado que la privación de toda ropa y abrigo exponiéndolos a la intemperie, en las condiciones climáticas extremas de Magallanes tenía por finalidad producir una condición de hipotermia y en definitiva un sufrimiento físico, que se procuraba aumentar deliberadamente tirándoles baldazos y pistones con agua fría.

Indica que otra práctica generalizada a que se sometió indiscriminadamente a los prisioneros políticos de Magallanes durante su cautiverio fue mantenerlos encapuchados o con los ojos vendados para privarlos de la noción de espacio y tiempo, para desorientarlos y anular su capacidad para percibir el entorno en que estaban. Encontrándose en tal situación, a los prisioneros se les propinaban -en forma aleatoria y sorpresiva- puñetazos, patadas y golpes con palos u otros objetos contundentes. También a los prisioneros se les obligaba a marchar y correr con los ojos vendados y desnudos, perseguidos por perros para que se estrellaran, tropezaran o cayeran al suelo, o se hirieran con las espinas de los arbustos de calafate, entre las burlas y risas de los centinelas.

Menciona que todos los prisioneros, cuando eran trasladados a otro centro de detención para ser interrogados, eran atados fuertemente de manos y pies, dificultando la circulación sanguínea, produciendo entumecimiento en las extremidades y provocándoles laceraciones en las muñecas y los tobillos. También eran obligados a permanecer de pie durante horas, con prohibición de moverse. Del mismo modo en muchas ocasiones debían permanecer por largo tiempo tendidos en el pavimento o en el barro con las manos en la nuca o en otras posiciones incómodas, sin permitirles cambiar de posición, bajo amenazas, siendo golpeados al menor movimiento.

Afirma que todos los demandantes en algún momento fueron encerrados en contenedores metálicos u otros espacios reducidos, apiñados con otros prisioneros, debiendo hacer sus necesidades fisiológicas en el



Foja: 1

mismo lugar, sin ninguna intimidad, debiendo permanecer en semejantes condiciones, a veces durante días, en medio de la fetidez, privándolos de toda alimentación, sin abrigo, mientras los guardias los iban sacando de a uno para llevarlos a interrogatorios y sesiones de tortura.

Añade que otro método de tortura que se aplicó sistemáticamente y en forma generalizada fue la privación del sueño. Esta tortura consistía en que cuando los prisioneros se quedaban dormidos los guardias los despertaban con golpes, encandilándolos con focos de luz intensa, haciendo ruidos con sus palos, arrojándoles baldes de agua fría y obligándolos a permanecer de pie hasta quedar exhaustos. Las golpizas con puños y pies, los culatazos y golpes con objetos contundentes tales como bastones, laques, fierros y palos eran frecuentes. Todas estas prácticas, constitutivas de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes a que se sometió a los prisioneros políticos, estaban destinadas a debilitar su resistencia, tornarlos psicológicamente vulnerables, aterrorizarlos y en definitiva socavar su moral, su dignidad y personalidad humana.

Asevera que casi todos los prisioneros políticos, al menos una vez fueron llevados a sesiones de interrogatorio en las cuales la “parrilla” constituía uno de los métodos de tortura más generalizados. Durante éstas los prisioneros políticos eran desnudados y atados a un somier, mientras los interrogadores les formulaban preguntas, muchas veces absurdas, como referidas al inexistente Plan Z o sobre cuestiones que éstos simplemente no sabían, les aplicaban corriente eléctrica en las partes más sensibles del cuerpo, como en los genitales, el ano y en otras cavidades como la boca, las fosas nasales, los oídos e incluso en los ojos. Esta tortura, según los relatos de las víctimas, provoca dolores indescriptibles al punto de que muchos de ellos refieren haber perdido el conocimiento.

Explica que también era frecuente una tortura conocida como “el submarino”, que consistía en sumergir a los prisioneros en un tambor con agua (a veces en aguas sucias o en letrinas), hasta que llegaban a asfixiarse o creían que iban a morir ahí mismo. De hecho, algunos prisioneros al ser sometidos a tales tormentos con electricidad o a simulación de ahogamiento debieron ser reanimados por médicos que colaboraban en los interrogatorios e incluso algunos fallecieron al sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Evidencia que no pocos prisioneros políticos fueron sometidos a simulacros de fusilamiento o a juegos macabros tales como la “ruleta rusa”. Cabe destacar que las sesiones de torturas invariablemente se realizaban con la vista vendada para impedir que los prisioneros pudiesen reconocer a los torturadores. Sin embargo, no cabe duda que las autoridades a cargo de los respectivos centros de detención conocían perfectamente quienes desempeñaron esta siniestra función.



Manifiesta que a pesar del gran sufrimiento físico y dolor que experimentaron con las torturas relatadas, los demandantes destacan la crueldad de las torturas psicológicas, como por ejemplo cuando eran obligados a escuchar los gritos desgarradores de otros prisioneros mientras eran sometidos a tortura o como cuando se les intimidaba con ser interrogados y torturados ellos mismos o cuando se les amenazaba con torturar a sus seres queridos y con violar a esposas, hermanas o hijas.

Expone que, en definitiva, todos los prisioneros políticos fueron sometidos a torturas. Al respecto, el Informe Rettig, indica que “...*en la región de Magallanes se aplicó la tortura de modo habitual y se estima que alrededor de 1.000 personas estuvieron privadas de libertad y sometidas a ese tratamiento...*”. Por otra parte, el Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura o Informe Valech indica que en Magallanes la tortura fue utilizada desde la instauración de la dictadura militar contra los prisioneros políticos, señalando textualmente: “Todos los testimonios recopilados por la Comisión, de hombres y mujeres, denunciaron que en la Duodécima Región desde el primer momento se recurrió a torturas en contra de los prisioneros, con extrema dureza, especialmente en el año 1973” (p.499).

Bajo el subtítulo “Campos de concentración y Centros de detención y tortura en Magallanes”, señala que Isla Dawson tuvo dos campos de concentración entre los años 1973 y 1974: COMPINGIM y Río Chico. Acto seguido, efectúa un relato de la forma en que operó cada uno de estos recintos.

Bajo el subtítulo “Relación de los hechos de los que personalmente fueron víctimas cada uno de los demandantes”, inicia con el relato de **Gonzalo Ananías González Vargas**, detenido durante 265 días, por la detención ocurrida el 11 de septiembre de 1973, y segunda detención desde el 25 de noviembre de 1973, hasta el 15 de agosto de 1974.

“Soy originario de Río Negro, Provincia de Osorno, actualmente X Región de Los Lagos. De niño fui criado y educado en una familia profundamente cristiana. Mis padres eran miembros de la Iglesia Adventista y militaban en el Partido Socialista. Estos nos inculcaron desde pequeños ideales de justicia social y de respeto a los derechos humanos. Mi padre era amigo y camarada de Salvador Allende y él, cuando andaba en campaña por el sur, pasaba a mi casa. Más adelante, en mis años universitarios, me identifiqué con las ideas de la Teología de la Liberación y apoyé el Programa de la Revolución en Libertad del Presidente Eduardo Frei Montalva. Más adelante, al resultar electo democráticamente el Presidente Salvador Allende Gossens me comprometí con su concepto conocido como la “vía chilena al socialismo”. En consecuencia, nunca pregoné el uso de la violencia para promover cambios sociales, porque creía que éstos debían alcanzarse mediante la educación y el diálogo social, dentro de un marco



Foja: 1

democrático. Al igual que yo, mis hermanos nos incorporamos al trabajo por los cambios del programa de Allende y trabajamos como funcionarios del Estado durante el gobierno de la Unidad Popular. ”

“Hasta el día del golpe militar trabajé vinculado al proceso de reforma agraria iniciado por el Presidente Alessandri y profundizada por el Presidente Eduardo Frei Montalva y que durante el gobierno de la Unidad Popular se llevó adelante en todas las estancias de Magallanes. A fines del año 1970 llegué a Punta Arenas para trabajar en el Departamento de Desarrollo Social Campesino de INDAP, donde mi función consistía en capacitar y educar a los campesinos para incorporarlos en el proceso de la reforma agraria. Mi misión allí fue formar los Consejos Campesinos que funcionaban en los Centros de Producción Campesinos y en las Cooperativas Agrarias. Yo andaba casi siempre en terreno, recorriendo todo Magallanes, capacitando y educando a los campesinos asentados en los predios expropiados. El chofer que se me asignó para cumplir tales funciones se llamaba Otto Trujillo, persona con quien llegué a desarrollar estrechos lazos de amistad toda vez que me acompañó hasta el día golpe. Luego, supe que este individuo era un infiltrado que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Militar y que participaba activamente durante los interrogatorios y sesiones de tortura a que fui sometido. ”

“Mi primera detención se produjo el mismo día del Golpe Militar, el 11 septiembre de 1973 en horas de la noche. Yo había viajado a Santiago porque mi padre había tenido un accidente de tráfico y se encontraba grave en la Posta Central. El día del Golpe pude ver desde mi terraza en la Población Villa Portales de Quinta Normal como los aviones Hawker Hunter bombardearon el Palacio de la Moneda y posteriormente la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago. Desde mi terraza también veía cómo los estudiantes arrancaban y se refugiaban en los blocks de Villa Portales. Los militares percatándose de esto hicieron una operación rastrillo en la Villa, buscando Block por Block, casa por casa y departamento por departamento. Entonces tocaron a mi puerta, mi madre abrió y entraron violentamente unos soldados quienes dijeron estar buscando guerrilleros y armas. Mi madre, muy asustada les señaló que en el departamento no habían armas ni guerrilleros. Los soldados registraron cada una de las piezas y cuando se aprestaban a retirarse encontraron mi carnet del Partido Socialista. El Jefe del grupo de soldados preguntó a viva voz: “¿Quién es Gonzalo González Vargas?” contestando “Soy yo, señor”. Entonces me detuvieron y me llevaron a un recinto militar que quedaba cerca de la población Villa Portales. En dicho recinto no me interrogaron, sino que me hicieron correr con un tambor en la cabeza. Como no podía ver me caí en varias oportunidades, obligándose a que me pusiera de pie y siguiera corriendo. Después de unas cinco horas detenido, me dijeron que me fuera a mi casa. Llegué a mi casa todo sucio y magullado. Mi madre y



Foja: 1

hermanas lloraron al verme. Tuve la sensación que los militares del Regimiento de Quinta Normal no tenían mucha información de mí.”

“En ese momento mi madre dice que nos vayamos al sur, a nuestra casa en Río Negro. A los pocos días viajamos en tren a Río Negro. Allí estuve un par de semanas en un ambiente de mucha incertidumbre e inseguridad, así que decidí irme a Punta Arenas creyendo que allí estaría a salvo. Tomé un avión LAN de Puerto Montt a Punta Arenas. Al aterrizar en el aeropuerto me esperaban unos agentes de civil que me detuvieron, me subieron a un jeep, me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar que resultó ser un “centro de torturas”.

“En efecto, al llegar a ese Centro me hicieron un “recibimiento”, diciéndome cosas groseras y golpeándome con una violencia tal que quedé aterrado. Después se me ordenó sacarme toda la ropa y me colocaron sobre una parrilla metálica, atándome las manos y colocándome electrodos en las partes más sensibles de mi cuerpo, procediendo a aplicarme corriente eléctrica. Sentía un dolor indescriptible invadiendo mi cuerpo. Me hacían preguntas, la mayoría de ellas absurdas como por ejemplo por qué Allende me había mandado a Punta Arenas y cuál era mi misión. Por qué yo hablaba mucho por teléfono con las autoridades de Santiago. Me gritaban cosas tales como que yo era un “ideólogo marxista”, un “comunista de mierda”, un “peligro para Chile”. Pensaba que me iban a matar. Me interrogaban pero se me hacía difícil responder las preguntas que se me formulaban porque tenía la lengua traposa producto de la electricidad. Entonces, me dieron más golpes y me aumentan la intensidad de las descargas eléctricas.”

“Recuerdo que me preguntaron dónde estaba Sergio Loguercio, el jefe del Partido Socialista de Punta Arenas, a quién no habían podido encontrar. Al responderles que nada sabía de Loguercio más palos me daban. Llega un torturador y me dice en forma amable “Oye, tú estas sufriendo por tu propia culpa, yo te quiero ayudar, así que dime la verdad sobre Loguercio “. Esa voz amigable se transformó en una bestia al reiterar que no tenía la menor idea dónde podía estar Loguercio. Lo que más me llamó la atención era el lenguaje soez que usaban porque podía distinguir el dialecto y el acento de los torturadores, toda gente llena de odio y muy malvada. Por la forma de hablar suponía que los torturadores en su gran mayoría venían de Santiago.”

“Mis torturadores sabían todo acerca de mí: de mi trabajo en INDAP, de mis charlas de capacitación, incluso cosas de mi familia. Era desconcertante cómo los interrogadores conocían cosas privadas de mi vida y de mi familia. Sentí que ellos no estaban a salvo. En medio de la tortura casi pierdo el conocimiento. Les advertí a mis torturadores que unos cuantos años atrás me había dado un ataque de epilepsia debido a un golpe



Foja: 1

en la cabeza, y que temía que me fuera a dar otro ataque. De repente me dieron unas convulsiones tremendas y los interrogadores llamaron a un “médico” que luego de examinarme les ordenó parar. Me desataron y me ordenaron que me vistiera. Muy adolorido me llevaron a otro lugar siempre con una venda puesta a mis ojos y me tiraron en una celda pequeña. Ahí permanecí aislado varios días, sin tener contacto con nadie, ni siquiera con los carceleros, sin alimentación y sin agua.”

“El lugar resultó ser el Regimiento Pudeto. Mientras estaba aislado en la celda pude darme cuenta que a unos metros más había una gran cantidad de prisioneros que estaban en una suerte de Gimnasio. Podía oír sus voces pero no podía verlos. Sólo quería ver y abrazar a mis compañeros de sufrimiento. Luego me sacaron de la celda de aislamiento y me trasladan al Gimnasio del Regimiento, donde vi a varios amigos, como Pedro Calixto y Claudio Mardones. También pude encontrarme con varios dirigentes políticos, sindicales, campesinos y estudiantes que conocía.”

“No pasó mucho tiempo el darme cuenta de la atmósfera de temor y angustia que se vivía en ese lugar. Yo veía el estado en que llegaban los compañeros que venían destrozados por las torturas. Algo terrible. Estar detenido sin proceso, sin cargos, sin algún abogado que nos defendiera, sin visitas de nuestros familiares, sin contacto con el mundo exterior.”

“Un día vi entrar a Otto Trujillo, junto a un grupo de agentes de inteligencia, todos vestidos de civil que venían a buscar prisioneros para interrogarlos. Al verlos nos llenábamos de terror, porque sabíamos que nos venían a buscar para torturarnos. El Otto me viene a buscar y me separa del resto para llevarme nuevamente a interrogatorio. Tiemblo de pie a cabeza. No hay interrogatorio sin torturas. El que creía mi amigo, Otto Trujillo, no me saluda, me mira con frialdad, con rostro inexpresivo, como el que si no me conociera. Me llevan como un corderito al matadero. El “Otto” mi amigo, un torturador. Hasta el día de hoy no logro comprender cómo este individuo pudo caer tan bajo, traicionarme y torturarme salvajemente.”

“En la segunda sesión de interrogatorios Otto Trujillo no me torturó como en la primera vez, pero me hizo escuchar los alaridos de personas que estaban siendo torturadas. Aunque no me hicieron muchas preguntas, igualmente me golpearon, pero en forma más moderada que anteriormente. Estábamos en el Palacio de la Risa. Un submundo inhumano de crueldad y terror de gente que estaba sufriendo la tortura. Me llevaron de vuelta al gimnasio del Regimiento Pudeto y me incomunicaron de nuevo en una celda aislada. Cierta día vino el hijo del Jefe del Partido Socialista a dejarme comida a mi celda, el estudiante Miguel Loguercio, preso al igual que yo en el mismo lugar.



Foja: 1

La vida en el gimnasio del Regimiento era cruda. Dormíamos en el piso y había mucho frío. La comida era escasa y mala. Existía una atmósfera de temor e incertidumbre. Un día se nos comunica que íbamos a tener la visita de la Cruz Roja Internacional y que teníamos que hacer el aseo y estar bien presentable. La visita llega el 11 de diciembre de 1973 y hace una crítica al estado en que están algunos prisioneros. En el informe de la Cruz Roja se deja establecido de las condiciones del lugar y se entrega una lista de los nombres de 100 detenidos. Yo estoy en el número 72 de la lista.”

“Pasaron unos días y de repente se nos da una orden en la noche de hacer “las maletas” y salir del Regimiento Pudeto. Se nos da un tiempo limitado. Nos dicen que nos iban a llevar a otro lugar. Así que salimos con nuestras pilchas en camino hacia el puerto. Allí nos estaba esperando un buque de la marina. Sentíamos gran angustia. No sabíamos hacia donde nos llevaban. Algunos creían que nos iban a lazar al mar. Nos subimos al buque y zarpamos. Después de algunas horas de navegación, llegamos a una isla. Era la Isla Dawson, un recinto de la marina que irónicamente había sido cedida a la Marina Chilena por el presidente Salvador Allende. Grande fue mi shock al ver las barracas, los alambres de púas, las torres de control, los soldados fuertemente armados con perros. Me imaginé un campo de concentración nazi. Habíamos llegado a un recinto militar totalmente aislado del resto del continente. Al llegar al Campo de Concentración Río Chico de Isla Dawson se nos reunió en el patio del recinto en donde un oficial nos comunica que “éramos prisioneros de guerra “. Se nos lee la “cartilla” y se nos dice que debíamos cumplir las reglas del recinto. A mí se me ubicó en la barraca Charly junto a otros prisioneros. Había un frío enorme. Nunca he pasado tanto frío como en Isla Dawson. El lugar era inhóspito. Se nos obligaba hacer trabajos forzados. Se nos obligaba a marchar y cantar cantos militares en las mañanas. La alimentación era pésima y las condiciones higiénicas deplorables. Yo busqué trabajar en la cocina del campo de concentración y me dieron la oportunidad de ser ayudante del “cocinero”.

“Como ayudante de cocina podía “conversar” con los presos de otras barracas, aunque estaba prohibido. Ahí pude ver a don José Tohá, el Ministro del Interior, a quien lo veía muy enfermo y deteriorado. Estaba muy delgado y sin apetito. Yo le decía: “Come, José, come....”, con una sonrisa sin vida me rechazaba la comida. Me daba mucha pena verlo en ese estado, porque lo conocía como un hombre muy noble y como un político muy inteligente. Me dio mucha pena ver como se estaba muriendo lentamente.”

“De repente me enfermé, me puse amarillo y me dio fiebre. Llamaron al Dr. Jirón, quien me examinó y diagnosticó “hepatitis grave”.



Foja: 1

El Dr. Jirón aconseja a las autoridades del campo a hospitalizarme en el Hospital de Punta Arenas para evitar contagios. Vino una barcaza de la Marina a buscarme al Campo de Concentración y me llevaron al Hospital de la Marina de Punta Arenas. Ahí vi a Orlando Letelier, el Ministro de Relaciones Exteriores de Allende quien también estaba enfermo en el lugar. El médico me atendió allí me dijo que mi estado era preocupante y me mantuviera en cama sin moverme para no dañar al hígado. Orlando Letelier me venía a ver a mi pieza y, a pesar de haber en todo momento guardias armados, podíamos conversar un poco. Me decía Orlando que tenía una forma de cáncer a la piel y que le mandaban medicina de EE.UU. que los militares no se la entregaban. A Orlando no lo conocía personalmente, pero, me impresionó mucho este hombre, culto y caballero. Me contaba detalles del Golpe Militar que pocos sabían.. Nos hicimos muy amigos en el poco tiempo que estuvimos hospitalizados. ”

“Cuando me recuperé me dejaron en libertad. Me dijeron que no podía salir de la ciudad sin autorización, vale decir sin salvoconducto. En todo caso, la Dra. que me atendía me aconsejó irme a Santiago a seguir el tratamiento. Yo estaba aún débil y delgado. Había perdido como 15 kg.

Un buen día voy a la Intendencia a pedir permiso para ir a Santiago y ahí me encuentro con Otto Trujillo, mi viejo amigo quien casi me mata en las torturas. Le pregunto sobre mi caso y le cuento que debía irme a Santiago para seguir mi tratamiento. Para mi sorpresa el Otto me contesta que mi caso está terminado y que tenga paciencia que ya me darán el salvoconducto. ”

“Yo no tenía dinero, porque los militares me expropiaron mi cuenta bancaria, así que la Iglesia Adventista me ayudó económicamente y pude costear mi pasaje y tratamiento. Llegué a Santiago a mi Departamento de Villa Portales de Quinta Normal. Me siento ya mejor de salud, pero aún débil e inseguro y con secuelas de las torturas. No podía trabajar, porque estaba “marcado “. De repente oía que a amigos míos los tomaban presos de nuevo y los hacían desaparecer. Así que se me aconseja asilarme en alguna Embajada. A través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados se me instala en la representación diplomática de Dinamarca en Santiago. Allí en la Embajada danesa viví 15 días hasta que el gobierno militar me diera salvoconducto para abandonar el país. ”

“En diciembre de 1974 abandoné Chile vía la Embajada de Dinamarca en Chile. Una nueva vida comienza de nuevo, ahora en libertad, paz y seguridad en un país que me acogió y rehabilitó. Perdí mi nacionalidad e identidad chilena y comienzo a vivir como refugiado en un país con una cultura y lengua diferente. No me puedo quejar, pero, pienso que el exilio es la prolongación de la tortura, porque uno pierde todo lo que es ser chileno.



“En el exilio sufrí las secuelas de la tortura. Fue muy difícil. En Dinamarca me casé con una profesora danesa cuyo padre había estado en un campo de concentración nazi en Alemania. Mi suegro era oficial del ejército danés y fue tomado prisionero por la Gestapo y sufrió horribles torturas, pero, nunca habló sobre eso y mi esposa me decía: “No cometas el mismo error que mi padre “.... Tú debes hablar y comunicar tu historia para que no se vuelva a repetir. Tomé contacto con la Amnistía Internacional Danesa y me recibieron tan bien que me ofrecieron trabajar con ellos en la lucha por los Derechos Humanos en Dinamarca. Juntos con ellos creamos en Centro de Rehabilitación de la Tortura, para dar tratamiento a tantas víctimas que llegaban a Dinamarca de países con regímenes militares y que usaban la tortura como una herramienta de castigo y amedrentamiento. Junto con mi esposa comenzamos a trabajar para ayudar a las víctimas de la tortura política y sexual. Lamentablemente mi mujer se me murió de la esclerosis múltiple en 2003 y yo seguí el trabajando por los derechos humanos junto a mi hijo que hoy tiene 36 años.”

“En 1989 se me concede la amnistía para regresar a Chile. En todos estos años de exilio no tenía otro pensamiento que regresar a mi país y ver mi gente, mi familia. Vine solo. Mi esposa y mi hijo tuvieron miedo de venir conmigo, porque el dictador Pinochet todavía tenía las riendas del país. Mi deseo de volver era tan grande que después de 15 años de exilio regreso a Chile. Me detienen en el aeropuerto un par de horas, pero, me dejan entrar sin antes de informar dónde iba a estar. Debí dejar direcciones y teléfonos. Regreso a casa de mis padres en Rio Negro- Osorno. Me sentía vigilado, pero, nunca andaba solo, mi familia tenía temor que me hicieran desaparecer.”

“Posteriormente supe que me habían detenido por mi trabajo en Dinamarca en contra de la dictadura de Pinochet. Yo escribía en los diarios daneses sobre la situación en Chile. Lo hacía porque pensaba que Chile necesitaba la solidaridad internacional. No me podía quedar callado. Consideraba como mi deber por los presos, torturados, ejecutados y desaparecidos de la terrible dictadura que Chile vivió”

“Solamente pido justicia y exijo que el Estado de Chile asuma su responsabilidad por lo que se hizo durante mi cautiverio. Hasta el día de hoy no logro explicarme el ensañamiento demostrado por Otto Trujillo, a quien hasta días antes había considerado un verdadero amigo, a quien incluso le presté mi departamento en Villa Portales cuando él tenía que ir a Santiago.”

“El día del golpe de Estado tenía 32 años, producto de mi compromiso político con el gobierno de la Unidad Popular del Presidente Salvador Allende, fui secuestrado, conducido a centros de detención



Foja: 1

clandestinos, donde fui salvajemente torturado y sometido cotidianamente a tratos vejatorios, crueles, inhumanos y degradantes. Luego de permanecer privado de libertad, contra todo derecho, durante casi un año, pasando por diferentes centros de detención que se habilitaron en Punta Arenas y por el campo de concentración Río Chico de Isla Dawson, habiendo perdido 15 kilos de peso, caí gravemente enfermo con un diagnóstico de hepatitis, condición ésta en la que fui trasladado al Hospital Naval de Punta Arenas desde donde fui liberado. Ante el riesgo cierto de ser nuevamente detenido busqué asilo en la representación diplomática de Dinamarca en Santiago. En definitiva, gracias a la intervención del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Unión Europea, recibí refugio en Dinamarca, país donde he residido los últimos 43 años de mi vida.

“Durante 15 años estuve impedido de volver a ingresar en Chile, dado que las autoridades de la época se negaban a entregarme documentos de identidad chilenos, convirtiéndome en un apátrida. Ello significó separarme de mi familia, de mis amigos, de mis colegas y de todo lo que quería y amaba de mi país, como su cultura y tradiciones. Sólo logré recuperar mi identidad chilena con el retorno a la democracia.”

“Recordar lo vivido hace más de cuatro décadas como prisionero político durante la dictadura militar es volver a sufrir la experiencia más traumática de mi vida. También mi hermano mayor, Arnoldo González Vargas fue salvajemente torturado en Aysén y su mujer violada. Hoy está ciego y con diálisis. Las torturas le afectaron la vista y los riñones. ¿Por qué se me secuestró? ¿Por qué se me aplicaron torturas físicas y síquicas?”

“Mi registro como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura es el N° 10.540.”

Acto seguido, transcribe el relato de don **Miguel Ángel Ruiz Henríquez**, detenido durante 142 días, desde el 12 de septiembre de 1973, hasta el 31 de enero de 1974, quien expuso que *“Fui detenido el 12 de septiembre de 1973, en el Regimiento Pudeto de Punta Arenas. Debido a un bando ordenado por la autoridad militar emitido por radio y televisión con esa fecha me presente en la guardia del Regimiento mencionado como a las 17:00 hrs PM. De allí le ordenan a un soldado llevarme dentro del recinto militar donde me llevan al gimnasio en el cual ya se encontraban varias personas en una fila, lo cual tuve que hacer y me piden mi cédula de identidad toman mis datos y me dicen que a contar de este momento estoy detenido. Un oficial estaba a cargo de los prisioneros, pues posteriormente se nos dijo que de ahora en adelante éramos considerados prisioneros de guerra. Dado que en el gimnasio no había cama, literas y camarotes tuve que dormir como pude en las graderías sentado sin ningún abrigo sólo con lo que llevaba puesto. En la noche de ese mismo día se hizo un simulacro de que alguno de los prisioneros intentara fugarse por lo que se apagaron*



Foja: 1

las luces se disparó al aire y yo detenido y asustado porque no sabía que pasaba. Quiero hacer presente que donde se tomaban los datos existía sobre la misma mesa una ametralladora que llamaban una FA punto 50.

“Al día siguiente se me reiteró la condición de prisionero de guerra y estando en esa condición tenía que aceptar todas las ordenes que se me impusiera por estar en un recinto militar, que cualquier desobediencia a alguna orden sería tratada como en tiempo de guerra como un enemigo de la patria con el máximo rigor. En la mañana del día siguiente se me hizo formar y numerar y así todos los días la rutina de la mañana y al final del día era la misma formarse y numerarse. La comida era pésima. Lo único que era digerible era el café con pan que nos daban de desayuno. El 15 de septiembre de 1973 se me sacó vendado del Gimnasio del Regimiento Pudeto e interrogado en una dependencia cercana en el mismo Regimiento por 3 funcionarios de civil que no podía distinguir pues me pusieron una luz muy potente para que no los conociera, haciendo preguntas sobre mis actividades en el Instituto Superior de Comercio y en la Central Única de Trabajadores (CUT) y en la Inspección del Trabajo.

“En la primera institución hacía clases de contabilidad, en la segunda era consejero de finanzas en mi calidad de contador y en la tercera era Inspector del Trabajo. En esa oportunidad no recibí apremios físicos si apremios psicológicos, interrogándome por las armas y dónde estaban o quién las tenía. Que tenía que saber dónde estaban ya que pertenecía a la CUT y que existían los cordones industriales. Yo les explicaba que no tenía nada que ver con cordones industriales ya que mi función en la CUT era consejero encargado de finanzas. Me tuvieron como 2 horas interrogando sobre lo mismo que si sabía quién tenía armas y si tenía conocimiento de las bombas molotov que encontraron en el local de la CUT, cosa que para mí era desconocida. Junto con ello me preguntaban por los profesores que hacían clases en el Instituto Superior de Comercio si sabía las tendencias políticas de ellos, que actividades efectuaban en fin preguntas que no podía contestar pues yo asistía a hacer unas pocas horas de clases, pues mi función principal era ser inspector del Trabajo.

“Estando detenido en el Regimiento Pudeto un día que no recuerdo se me obliga a sacar fotos de frente y ambos perfiles. Las actividades era levantarse y formarme todos los días. Iba a los baños con un soldado apuntando en la espalda con un fusil máuser con lo que se llamaba “bala pasada” y que llegó el momento que se pidió hablar con el Comandante del Regimiento para solicitar que no se pasara bala porque con la situación que se vivía los conscriptos que tenían orden de tratarnos como traidores a la patria y prisioneros de guerra como si fuera enemigo se podía producir un accidente y matar a alguien a lo que el Comandante Pons accedió. En todo caso, en una oportunidad a un teniente que era comando se le escapó



Foja: 1

un tiro de un fusil SIC, motivo por el cual fue sacado del sector donde estaba la guardia que nos cuidaba y nunca más se vio. En el tiempo que estuve detenido en el Gimnasio del Regimiento Pudeto en la situación que se vivía hizo que, estando detenido un compañero que era médico recomendó que pidiéramos a nuestros familiares medicamentos para dormir y aguantar la angustia, el nerviosismo y el desconocimiento de que nos iba a pasar, por cuanto cada día era como si al día siguiente no sobreviviría.”

“Nadie sabía de qué se nos podía acusar aunque no se hubiera hecho nada. No había ninguna seguridad de seguir viviendo. Se nos hacía presente que si afuera moría cualquier uniformado, matarían a 10 de los prisioneros. Lo otro que psicológicamente me afectaba y a todos los detenidos eran el sacar a interrogatorio a algún compañero. Llegaban destrozados tanto por golpes, la corriente que le ponían, los diversos tipos de torturas que sufrían. Algunos llegaban diciendo que otra vez que lo llevaran pedirían que lo mataran. Durante mi estadía en el Gimnasio del Regimiento Pudeto me correspondió estar detenido con el ese entonces Diputado por la Provincia de Magallanes don Carlos González Yaksic, quien había sido mi profesor en el Instituto Superior de Comercio. Posteriormente fui contador de una de sus empresas por lo que nos hizo entablar una amistad. A Don Carlos González se le marco una Z en la espalda con un yatagán, como manera de demostrar a los demás prisioneros que si a un Diputado se le hacía eso que quedaba para el resto.”

“Sicológicamente eso me marcó para toda la vida, por cuanto se le mantuvo en una especie de enfermería que instalaron en el mismo gimnasio donde no pudo dormir de espaldas durante más de una semana. En las noches se llevaban a interrogatorio a algunos compañeros y la forma de llamarlos era con mucho ruido para que así no se pueda dormir y no poder conciliar el sueño a pesar de estar con pastillas para dormir. En una fecha que no recuerdo, se comenzó a llamar para que cada prisionero saliera del gimnasio para efectuar trabajos dentro del Regimiento.”

“En mi caso me llevaron a un container donde habían unos juguetes para los hijos de los soldados que se iban a distribuir para la pascua del soldado. Todos los días me trasladaban al container a pintar los soldados que era de madera y siempre con un guardia a mi lado. Aquí en Punta Arenas, aún siendo los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre siempre hace frío por lo que salir a trabajar dentro de un container sin calefacción quedaba entumido. Era casi toda la mañana sin disponer de alimentación alguna y lo mismo en las tardes. Así transcurrían los días sin saber el futuro que me deparaba. No tenía ninguna claridad en que me iba pasar si me iban a acusar de algo y cuándo me dejarían libre. La rutina de todos los días: formar numerarme y tomar un café con un pan. Luego al container con un guardia hasta las 12:00 hrs. Almorzar y para lo luego salir de nuevo



Foja: 1

al container a trabajar. Volver, numerarse y luego acostarse en el piso del gimnasio del Regimiento. Para ir al baño seguía el sistema de ir con un soldado apuntado con un arma en la espalda. ”

“En el período que relato luego del interrogatorio expuesto no me llevaron a ninguna parte a interrogatorio. Ello hacía que mi inseguridad aumentara porque la verdad es no había información sobre si me iban a procesar por algo si me llevarían a interrogatorio o me dejarían libre. Posteriormente el 21 de diciembre de 1973 como a las 3:00hrs AM. luego de una revisión muy prolija de todas mis pertenencias fui trasladado a Isla Dawson en un transporte de la Armada de Chile, junto a los demás prisioneros que se encontraban en el Gimnasio del Regimiento Pudeto. Al llegar a la playa de Isla Dawson nos bajaron, como a 200 metros de tierra firme, a las frías aguas del Estrecho de Magallanes y me llevan al Campamento Rio Chico, que estaba a cargo de un oficial de apellido Paris, y me designan a la Barraca Charly con el N°13 donde permanecí hasta el 23 de enero de 1974, tiempo en el cual nos obligaron a trabajos forzados acarreando troncos, siempre apuntado con fusiles por los soldados, que por orden superior, eran con “bala pasada”, lo que psicológicamente era muy traumático. Todos los días me hacían formar y cantar la canción nacional con la estrofa “Vuestros nombres valientes soldados ... ” mientras se izaba el pabellón nacional. ”

“El campamento Rio Chico era igual que los campos de concentración de la 2ª. Guerra mundial que diseñaron los nazis. Con cerco de alambre de púas, con casamatas en los dos lados de un cerro, con ametralladoras apuntando hacía las barracas. Con una sirena instalada sobre el techo de lo que era la cocina y comedor. En otras palabras, un campo de concentración de la 2ª guerra mundial instalado en territorio chileno. ”

“Estando en la Barraca Charlie se pide por la superioridad de quien estaba a cargo de los prisioneros que se designe un delegado de barraca y un secretario del delegado. De delegado de la barraca se nombra a don Carlos Zanzi Cucuini, el de mayor edad en la barraca y don Carlos me designa a su vez su ayudante como secretario. Allí había que reportar en la formación quienes no estaban por estar enfermos y reportar cualquier novedad que se presentara con los prisioneros, necesidades de medicamentos, de alimentos, ropa, es decir, conseguir de alguna forma pasar la situación compleja que se estaba viviendo. También se pedía que quienes tuvieran problemas de alguna enfermedad pudiera ser visto por el Dr. Jiron quien se encontraba separado de los prisioneros de Punta Arenas, pero que se le había autorizado a atender a los prisioneros en un sector que estaba separados de las barracas y que estaba destinado a la atención de enfermos. ”



“Había un estricto horario para levantarse en las mañanas, para comer para ir a trabajar diariamente y para acostarse. La comida, todos los días eran lentejas sin lavar, con pedazos de la bolsa en que venía con piedras y mugre. Junto con mandarnos a cortar troncos al bosque, nos hacían cortar leña para un calentador de 200 litros que había instalado dentro de la barraca la cual era como de 30 metros x 5 metros, aproximadamente, lo que era imposible que dicho calentador calefacciónara todo el recinto. Una de las mayores angustias que se vivía en la Isla Dawson, que era mayor incluso que la incertidumbre de estar en el Gimnasio del Regimiento Pudeto, pues estar en una isla sin ninguna comunicación con los familiares y sin saber que iba a pasar con uno era mucho más aterrador. Nadie sabía el destino de cada uno de los prisioneros. Se elucubraba todos los días que nos iba a pasar.

“Los mismos guardias se encargaban de psicológicamente crear confusión. En una oportunidad corrió el rumor que un submarino ruso iba a tratar de rescatar a algunos prisioneros, lo cual hizo que todos nos sintiéramos aún con mayor temor, por cuanto volvió a informarse que si pasaba eso no iba a quedar nadie vivo. Posteriormente, me trasladan como el 23 de enero de 1974 en una lancha torpedera a Punta Arenas, junto con 12 prisioneros más. Nos desembarcan en un muelle del sector de Asmar, en el sector sur, donde una persona de civil me hace una zancadilla lo que hizo que me cayera en los tablones del muelle. De allí todo lastimado me llevan una vez más al Regimiento Pudeto. Esta vez, nos metieron en un sótano debajo de una cocina del mismo Regimiento donde debíamos dormir en el piso sin calefacción y con la luz encendida todo el tiempo, donde se paseaban los guarenes (ratas grandes). Allí comíamos en el mismo piso. Se iba a buscar una olla por alguno de los mismos prisioneros y con un cucharón nos servíamos. Para hacer nuestras necesidades llamábamos al guardia que estaba en la puerta. Si era orinar, se hacía allí cerca de la puerta. Si era defecar nos llevaban a un baño que no recuerdo donde estaba ubicado. En este lugar siempre estábamos todos los días encerrados sin poder salir, salvo para hacer nuestras necesidades.”

“En un día no determinado me llaman, me vendan y me llevan en un camión como a las 8,30 hrs con otros prisioneros a interrogatorio. Lo primero que me preguntan “Cómo te llamas?” Y respondo Miguel Ruiz Henríquez. A lo que la persona que me interrogaba me dice: “Aaaah... así que éste es el famoso Miguel Enríquez...ahora vai a ver lo que es bueno, conchetumadre. Y de partida me golpean en los riñones, en la espalda, en el pecho, me aplican corriente en varias partes del cuerpo. Me ponen una especie de anillo en un dedo y en la cien y me pasan corriente al mismo tiempo que me interrogan. Producto de que cuando era joven padecía de una arritmia cardiaca, al aplicarme corriente se me producen convulsiones lo que hizo que se suspendiera momentáneamente la aplicación de



Foja: 1

corriente. Allí llaman a alguien que hacía de médico y le dice a mis torturadores que no me pongan más corriente porque puedo “pasar de largo” Estuve todo el día en lo que se denomina Palacio de la Risa. En un tiempo en que no me pusieron corriente me hicieron tirarme al piso en un pasillo y todos los que pasaban por dicho pasillo me pisaban la espalda. Finalmente, ya cuando me iban a regresar el Regimiento Pudeto, me hicieron sentar, siempre vendado y alguien me pega en ambos oídos, lo que se llama “teléfono” y me dicen que eso es para que “no te olvides de lo que pasó”.

“Dentro del interrogatorio uno de los interrogadores me decía que confesara todo para evitar las torturas y como uno agudiza los sentidos la voz me era conocida. Era de un compañero de trabajo de la Inspección de Trabajo llamado Mario Yañez Oyarzún. Su voz, dado el tiempo que estuve trabajando con él y en esos momentos muy traumáticos hace que el ser humano pueda distinguir lo que estaba aconteciendo más nítidamente. Luego de ponerme corriente me hacen firmar una declaración como dirigente de la CUT con la vista vendada relacionado con los cordones industriales que como manifesté no tuve participación en ello. De todos modos había que firmar algo que uno no sabía que firmaba. Regreso al sótano bajo la cocina de los suboficiales como a las 18,00 hrs. PM.”

“Posteriormente, días después, me llevan de nuevo al Palacio de la Risa por todo el día, desde las 8,30 hrs hasta las 18,00 hrs. Sin embargo en esta oportunidad no me hacen nada. Me tuvieron todo el tiempo vendado escuchando como torturaban a los otros prisioneros políticos, tratamiento de tortura psicológica muy traumática, pues uno no sabe cuándo lo van a torturar de nuevo.”

“Como consecuencia de las torturas, tanto físicas como psicológicas, tuve que ser atendido por un psiquiatra y, hasta el día de hoy, tengo un silbido en los oídos que según el otorrino no se puede hacer nada. Junto a lo anterior tengo hipertensión arterial, insomnio, irritabilidad y depresión.”

“El 31 de enero de 1974, fui puesto en libertad condicional, y posteriormente, después de 6 meses, me concedieron la libertad incondicional. Al final de todo lo vivido durante 4 meses y 20 días no tuve ningún proceso, no fui condenado por nada ni por ley de seguridad del estado ni por ley de control de armas; por lo que al solicitar hablar en el mes de Junio de 1974 con el fiscal militar Gerardo Álvarez Rodríguez porque quería irme del país, me señala que debo dirigir una carta al Señor Juez Militar pidiendo mi libertad incondicional por no haber sido condenado ni por ley de seguridad del Estado ni por la Ley de control de armas.”



Foja: 1

“Junto a las incapacidades, como resultado de mi detención perdí el trabajo como profesor del Instituto Superior de Comercio y como Inspector de Trabajo. Estuve detenido con diversos dirigentes políticos de la época como Carlos González Yacksic, Antonio González Yacksic (hermano de don Carlos) Carlos Zanzi Cuccuini, Liborio Barrientos Oyarzún, Angel Vera Fernández, entre otros.”

“Mi registro como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura es el N° 21.775.”

Luego, transcribe el relato de don **Rolando Jacobo Neira Gavilán**, detenido durante 309 días, desde el 14 de septiembre de 1973, hasta el 19 de julio de 1974, quien expuso que *“Fui detenido el 14 de septiembre de 1973 en dependencias de la Oficina Dirección Zonal de CORA en Punta Arenas, aproximadamente a las 08:45 horas, por agentes de servicios de inteligencia militar. Me obligaron a subir a un vehículo militar y en él me condujeron hasta un Regimiento en el cual estuve todo el día y la noche encerrado en una dependencia aislada sin que se me diera razón alguna sobre mi detención. Al segundo día de incomunicación en la noche me sacaron vendado para ser interrogado, obligándome a reconocer actos no cometidos y vinculaciones con personas desconocidas que estarían relacionadas con el plan Z y posesión de armas. Además, responder por haber firmado una inserción de prensa junto con otras personas en repudio por un allanamiento realizado a la Lanera Austral, como también sobre mis funciones laborales dentro de CORA, ya que mis funciones me vinculaban directamente con diferentes organizaciones campesinas.”*

“Posteriormente se me llevó a un gimnasio donde había un número indeterminado de detenidos, en donde se continuó con mi interrogatorio y careos, con presiones psicológicas, amenazas y apremios físicos brutales, que se repitieron durante mi permanencia en el Regimiento de Infantería Reforzado Motorizado N°10, “Pudeto”, desde donde me sacaron en varias oportunidades en la noche, amarrado y vendado, con malos tratos físicos y verbales y llevado a una casa aislada de la ciudad de Punta Arenas, que la llamaban “El Palacio de la Risa”, en donde era sometido a un trato vejatorio de apremios físicos, como golpes en diferentes partes del cuerpo y aplicación de electricidad amarrado a una especie de somier metálico con electrodos, en los genitales y otras partes del cuerpo.

Como medio de ablandamiento se me sometió a un falso fusilamiento, privación de sueño, posturas forzadas del cuerpo, manteniéndome hincado con un trozo de madera redonda en las rodillas. Con los golpes en la punta de los dedos de ambas manos, se me produjo como secuela una deformación permanente de la matriz de algunos de los dedos de ambas manos. Todo ello para obligarme a reconocer cargos y establecer vinculaciones con personas probablemente comprometidas, como



«RIT»

Foja: 1

también firmar documentos no conocidos y lo más probable comprometedores.”

“Con fecha 21 de diciembre de 1973, fui sacado del Regimiento Pudeto vendado y amarrado y trasladado en una barcaza, entre ovejas, con destino a la Isla Dawson. Allí se me confinó al Campo de concentración de Río Chico en la Barraca Charly. Durante mi estadía en Isla Dawson fui sometido a nuevos interrogatorios y careos con otros detenidos, sobre vinculaciones políticas, además se me sometió a trabajos forzados junto al resto de los detenidos de las diferentes barracas, sin importar las inclemencias del tiempo soportando lluvia, nieve y frío.”

“Entre las personas que también se encontraban detenidas en los diversos recintos en que estuve prisionero puedo mencionar a don Patricio Rettig Montalva, Héctor Vera Cárdenas, Francisco Palavicini Giaconi, Antonio Mella Cárdenas, Mario Moreno Opazo.”

“Posteriormente, en fecha que no recuerdo fui trasladado a Punta Arenas y confinado en el Campamento Cochrane del Regimiento del mismo nombre donde con fecha 12 de Julio de 1974 fui visitado por delegados de la Cruz Roja Internacional. Con fecha 19 de Julio de 1974, fui puesto en libertad condicional, por haber sido condenado en causa rol 117-73 del III Juzgado Militar, condenado a la pena de vigilancia del Patronato de Reos, con firma durante 1 año. Mi registro como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura es el N° 16.736.”

Seguidamente, transcribe el relato de don **Jovino Guala Sánchez**, detenido durante 140 días, desde el 15 de septiembre de 1973, hasta el 1 de febrero de 1974, quien señaló *“Fui detenido por funcionarios de la Fuerza Aérea, de uniforme, armados con fusiles, quienes no se identificaron a las 11:45 horas del día 15 de septiembre de 1973, en mi domicilio de Avda. España 178, estando en compañía de mi cónyuge y de mi hija, a la sazón de 8 años. Estos hicieron un allanamiento, pieza por pieza e incluso revisaron el patio de la casa en busca de un supuesto armamento pero lo único comprometedor que encontraron fue un cuadro del Presidente Salvador Allende. Me llevaron a un bus en que se encontraban unos 20 soldados. De allí me llevaron a un centro de detención en Bahía Catalina, donde permanecí hasta el 20 de noviembre de 1973, sin comunicación con el exterior. En ese entonces quien estaba a cargo de la Fuerza Aérea de Chile en Punta Arenas era José Berdichewsky Scher, General de Brigada Aérea, Comandante en Jefe de la IV Brigada Aérea.*

“El primer día quedé solo en una pieza sin mobiliario, sin cama ni calefacción por lo que tuve que dormir tirado en el piso sin una frazada ni nada para cubrirme. En una esquina había un hoyo en el cual tenía que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHXCXHJPX

Foja: 1

orinar y defecar. El segundo día me metieron en un container sin luz ni calefacción, y con la misma ropa que tenía cuando me detuvieron. En dicho container permanecí aislado dos días y dos noches. Durante los tres primeros días no me dieron ningún tipo de alimentación, solamente agua. Con posterioridad me trasladaron a una casa donde había otras seis personas detenidas.”

“Más o menos seis días después de mi detención me sometieron a un interrogatorio en la misma Base Aérea Bahía Catalina. Me vendaron los ojos e hicieron subirme por una escalera a una mesa sobre la cual había dos sillas, sentándome en la silla más alta como haciendo equilibrio, por lo que en cualquier momento podía caer al suelo. Una vez arriba los interrogadores comenzaron a preguntarme acerca de un cargamento de armas del que supuestamente tendrían conocimiento por el hecho de trabajar en LAN Chile como despachante de carga. Eso fue alrededor del mediodía. En el interrogatorio había una persona que decía conocerme y que también trabajaba en LAN y que afirmaba que había llegado una carga con armamento. Respondí que nunca tuve conocimiento de algo semejante explicando que toda carga pasaba por Aduana y que no tenía la facultad para abrir cajones y bultos sin la autorización de Aduana, por lo que ignoraba que hubiese llegado armamento.”

“En el período en que estuve en Bahía Catalina en muchas oportunidades me hacían levantar más o menos a las 4 o 5 de mañana, y trasladarme desnudo al Estrecho de Magallanes, con término militar “punta y codo” hasta la playa, obligándome a meterme al agua gélida hasta que temblaba.”

“A los 30 días más o menos me condujeron vendado a un interrogatorio en lo que después supe era el Palacio de la Risa, en Avenida Colón. Al llegar a ese recinto los guardias me hicieron agacharme avanzando por una especie de túnel para posteriormente subir por una escalera. La persona que me interrogó también me preguntó sobre armas. Otra persona me preguntó si sabía quién me estaba interrogando y yo le respondí que el Sr. Solis pues lo conocía como funcionario de la FACH. Entonces al mencionar el nombre de la persona que me estaba interrogando sugirieron que por haber mencionado el nombre tenían que matarme. El que me interrogaba dijo “no pasa nada, es un buen muchacho”. Entonces alguien dijo: “Espera, éste no se puede ir así” y entonces me metió algo en la boca diciéndome que mordiera fuerte y cuando lo hice me dieron una descarga de corriente eléctrica. Sentí mi cabeza como que volaba en el aire y me mordí la lengua. También me pusieron corriente en los oídos y en los ojos, mientras me decían cosas como: “¿Sabes cuánto tiempo vas a vivir? ¿Para qué vas a vivir si vas a quedar sordo, ciego y mudo?... Mejor que te mate”.



Foja: 1

“En la segunda ocasión que me llevaron al Palacio de la Risa no me interrogaron pero me empezaron a golpear con una tabla en distintas partes del cuerpo. Me dejaban un rato tranquilo y luego me volvían a golpear. Así estuvieron pegándome desde las 10:00 a las 16:00 horas hasta que una persona, aparentemente un médico, ordenó que pararan.”

“La tercera vez que me llevaron al Palacio de la Risa me volvieron a interrogar sobre las armas y me preguntaron si conocía a Gerónimo España ya que según ellos España había dicho que yo andaba armado a lo cual les manifesté que no, que nunca había usado un arma. En esta oportunidad me hicieron firmar una declaración cuyo contenido desconozco hasta el día de hoy. Los torturadores me dijeron que tenían que darme “un premio”. Me preguntaron si conocía a un tal “Pacheco” de Lanera Austral, quien señalaba que él era el jefe de los cordones industriales. Entonces llamaron a Pacheco, y que para solucionar el tema tenía que primero Pacheco pegar dos golpes de puño y después me obligaron a darle también dos golpes a Pacheco. Terminado eso, me hicieron tender en una camilla, siempre vendado, me amarraron las muñecas y los tobillos con cuerdas y me dijeron que como era pequeño debía crecer y procedieron a estirarme con un sistema hidráulico, hasta que perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba sentado en una silla. De allí me llevaron nuevamente a Bahía Catalina. A esas alturas ya estaba psicológicamente destrozado y con pensamientos suicidas dado que no sabía que me pasaría o si volverían a torturarme.”

“Después de 45 días recién pude tener contacto con mi familia, esto es con mi cónyuge y mis dos hijos que entonces tenían 10 y 8 años de edad. Posteriormente, con fecha 21 de Noviembre de 1973 hasta el 20 de Diciembre del mismo año, permanecí detenido en el Estadio Fiscal de Punta Arenas. Todos los días había que formar y cantar la canción nacional con la estrofa “Nuestros nombres valientes soldados...” En el Estadio Fiscal había literas y nos daban de comer. En uno de esos días nos dieron fideos blancos como mazamorra que era incomible y nadie comió. Como castigo nos hicieron formar y correr varias vueltas, cantando que estaban ricos los fideos y al que rezagaba, como yo lo tiraban al suelo y le pisaban la cabeza, lo que producía dolor e impotencia. Ante esta humillación me rebelé, me paré y caminé hacia el guardia que me apuntaba, tratando que me matara pues habían instrucciones que los prisioneros no se podían acercar a más de dos metros de distancia de los guardias. En esos momentos un sub oficial mayor llamó al guardia diciéndole que no disparara. De ahí me llevaron a la enfermería para curarme las heridas de mi cabeza.” En la Base Aérea de Bahía Catalina estuve junto a varios prisioneros entre los que puedo mencionar a don Ernesto Livacic, don Mario Varilla y don Alfonso Cárcamo.”



“Con fecha 21 de diciembre de 1973 me trasladaron a Isla Dawson confinado a la Barraca Bravo designado como Bravo N° 46 del Campamento Río Chico y ahí me enteré que quien estaba a cargo del Campamento era el Capitán Paris. En Isla Dawson me forzaron a efectuar trabajos pesados como cortar leña, cargar troncos desde el bosque al campamento. La alimentación era escasa y mala. Generalmente nos daban sólo lentejas sin lavar. Estando prisionero en Isla Dawson recuerdo que en la Barraca Bravo entre muchos otros prisioneros se encontraban Santiago Oyarzún, un Dr. Rojas que trabajaba en ENAP (Empresa Nacional del Petróleo).

“Permanecí confinado en Isla Dawson hasta el 1° de febrero de 1974, día en que fui trasladado a Punta Arenas, en una embarcación de la Armada, llegando al sector de ASMAR Punta Arenas, donde me hicieron firmar un documento para presentar en el trabajo para justificar mi ausencia durante el tiempo que estuve prisionero. Luego me subieron a un camión y me trasladaron hasta mi domicilio. Debí firmar cada 15 días en la 1ª Comisaria de Carabineros de Punta Arenas, hasta el 12 de julio de 1974.”

“Mi registro como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura es el N°10.690.”

Luego, transcribe la declaración de don **Antonio Rafael Bianchi Panicucci**, detenido durante 148 días, desde el 11 de septiembre de 1973, hasta el 5 de febrero de 1974, quien manifestó que *“A la fecha del golpe militar era militante del Partido Socialista y me desempeñaba como encargado de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) en la Intendencia de Magallanes. El 11 de Septiembre de 1973, alrededor de las 16:00 horas me encontraba tomando onces en mi domicilio de Avda. Bulnes 0926, Departamento 14, de Punta Arenas junto a mi cónyuge, Nury Bernarda Chelech Chelech y mis hijos de 4, 11 y 13 años de edad, momento en el cual llegaron varios vehículos de un Regimiento que se apostaron en la calle, descendiendo soldados algunos de los cuales rodearon el edificio mientras los otros ingresaron y golpearon fuertemente la puerta del departamento. Apenas les abrí los soldados ingresaron violentamente apuntando con sus fusiles a los miembros de mi familia, preguntando a viva voz por mí. Me identifiqué e inmediatamente me dijeron que quedaba detenido y que debía acompañarlos, sin precisar por qué y dónde me llevaban. El oficial que estaba a cargo en ningún momento exhibió una orden judicial ni tampoco dio explicaciones, señalando que más adelante se me informaría sobre los motivos de mi detención. Luego, allanaron todo el departamento, buscando algo indeterminado, sacaron de los cajones y closets todas las cosas tirándolas al suelo. Mis tres hijos estaban muy asustados por la inusitada violencia del operativo porque no entendían qué*



«RIT»

Foja: 1

estaba pasando y por qué me llevaban detenido, por lo que empezaron a llorar angustiados al igual que mi cónyuge.

Fui sacado a empujones del departamento, me vendaron la vista y me subieron a un camión. De ahí me condujeron a Avda. Colon, entre Bories y Chiloé, llamado el Palacio de la Risa donde me obligaron a permanecer parado contra una pared hasta las 10 de la noche aproximadamente. Esa noche, efectivos del Ejército me trasladaron hasta el gimnasio del Regimiento Pudeto y al día siguiente al astillero ASMAR, donde me hicieron caminar con los ojos vendados por un tablón para subirme a una patrullera y de ahí navegando hasta la Isla Dawson, el Campamento COMPINGIN donde se me asignó un número para identificarme en lo sucesivo (Eco 19).

En dicho campamento, fui sometido cotidianamente a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todos los días, muy temprano debía levantarme y formar obligándome a cantar la canción nacional y especialmente la estrofa referida a los “hombres valientes soldado...” y diversas marchas militares.

Todos los prisioneros del campo de concentración éramos obligados a realizar trabajos forzados fuera del campamento, trasladando pesados postes de ciprés, apaleando ripio y otras labores como cargar piedras, en fin el trabajo era extenuante. Regresábamos como a las 6 de la tarde, bajo la vigilancia permanentemente de soldados que no nos permitían descansar pues cada vez que producto del agotamiento bajaba el ritmo de trabajo, éramos castigados con golpes, patadas y culatazos. Toda la alimentación de los prisioneros consistía en un plato de lentejas sin lavar, con piedras con cáñamo y a media tarde una choca con café. Producto de la mala alimentación bajé considerablemente de peso.

Mientras permanecí en el campamento COMPINGIN, todas las noches los guardias escogían a determinados prisioneros para llevarlos a interrogatorios. Desde la barraca podíamos escuchar los gritos desgarradores de los compañeros mientras eran torturados lo que era muy angustiante. A fines de octubre de 1973 o principios de Noviembre de 1973, me llevaron de regreso a Punta Arenas junto a un grupo de prisioneros llegando en horas de la noche. Fuimos introducidos en un Container sin luz, agua ni calefacción, donde permanecimos varios días mientras cada uno de los prisioneros era llevado a los interrogatorios. Todas las noches sentía disparos de armas y de gente que se quejaba. Me atemorizaba que en cualquier momento me vinieran a buscar a mí para interrogarme o fusilarme y producto del stress sufrí un fuerte ataque epiléptico con convulsiones debiendo ser medicado con fenobarbital. Luego de ese episodio fui llevado de regreso a Isla Dawson donde sufrí varios ataques epilépticos,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHXCXHJPX

Foja: 1

siendo atendido, en la mayoría de las ocasiones por el Dr. Girón, quien también era prisionero político.”

De igual modo, a pesar de mi condición médica, durante mi cautiverio me hacían realizar trabajos forzados y frecuentemente me vendaban los ojos, me vejaban y me daban golpes. Por ejemplo, para diversión de los guardias, éstos nos hacían luchar contra otros prisioneros cual gladiadores. Producto de lo vivido quedé con un severo trauma y hasta el presente sufro frecuentes episodios de epilepsia.”

De las personas que estuvieron detenidas conmigo recuerdo a don Carlos González Jaksic, Diputado por la Provincia, Mario Belmar, Alberto Marangunic, Antonio González y Liborio Barrientos. El 5 de febrero de 1974 me llevaron a la ciudad de Punta Arenas y de ahí fui dejado en libertad, por lo que permanecí privado de libertad en las condiciones descritas aproximadamente un período de cinco meses. Mi registro como víctima de prisión política y tortura se encuentra incluido en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura bajo el N°3165.”

Acto seguido, transcribe la declaración de don **Liborio Barrientos Oyarzun**, detenido durante 266 días, desde el 11 de septiembre de 1973, hasta el 3 de junio de 1974, quien señaló *“Fui detenido el 11 de septiembre de 1973 a las 14,00 horas en el Hospital Regional de Punta Arenas por Infantes de Marina, quienes me llevaron al Regimiento Cochrane y desde ahí, ese mismo día, me trasladaron con un grupo de prisioneros políticos al Campamento COMPINGIN en Isla Dawson, donde me asignaron como nombre el de G-1, para efectos de identificación pasamos a ser sólo un número anónimo.*

En ese campo de concentración fui obligado a realizar trabajos forzados como cargar troncos y otros materiales.

A fines de octubre de 1973 fui trasladado a un Regimiento en Punta Arenas, en el sector Ojo Bueno, denominado Campamento General Schneider, donde permanecí durante 9 días, lapso durante el que fui llevado al llamado Palacio de la Risa ubicado en Avda. Colón 536 de Punta Arenas donde se me torturó salvajemente.

Se me sometió a golpizas, corriente eléctrica en los testículos, quemaduras con plancha en la mano izquierda, culatazos en la pierna izquierda, a consecuencia de las cuales aún conservo cicatrices visibles.

En el tiempo que estuve detenido en el Regimiento de Ojo Bueno, se me privó del sueño nocturno. Luego de estar nueve días en Punta Arenas, nuevamente me llevaron confinado a Isla Dawson, esta vez a la Barraca Alfa, del campo de concentración Río Chico, donde se me asignó como A-81, siendo sometido a idénticos tratos crueles, inhumanos y degradantes que



«RIT»

Foja: 1

los experimentados durante mi primer confinamiento en el campamento COMPINGUIM de Isla Dawson.

Allí permanecí prisionero obligado a trabajos forzados hasta los primeros días de Julio de 1974 en que fui trasladado a Punta Arenas, quedando esta vez como prisionero en el Estadio Fiscal, custodiado por funcionarios de la FACH. Permanecí allí durante tres días más, al cabo de los cuales fui dejado en libertad.”

“Durante mi cautiverio reconocí entre otros a Aristóteles España (Q.E.P.D), Ramón Enríquez, Sergio Lausic G., Rubén Moil, Carlos González Y., Carlos Zanzi C., Antonio González Y., Francisco Márquez, Francisco Alarcón, Ricardo Marcelli, entre otros.

Mi registro como víctima de prisión política y tortura consta del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura con el N°2.790.”

Luego, transcribe el relato de don **Sergio Alfonso Barría Barría**, detenido durante 458 días, desde el 11 de septiembre de 1973, hasta el 12 de diciembre de 1974, quien declaró que *“El 11 de septiembre de 1973, siendo alrededor de las 15:00 horas, fui llamado en un bando militar difundido por radio y televisión. Siendo las 17:00 o 18:00 horas me dirigí al Regimiento Pudeto de Punta Arenas, presentándome en la guardia, quienes me escoltaron al gimnasio de dicho Regimiento, en cuyas tribunas había ya muchos detenidos. Ahí debí permanecer sentado toda la noche, mientras ingresaban agentes del servicio de inteligencia para llevarse entre golpes y gritos a prisioneros determinados”.*

“El 12 de septiembre, como las 17:00 horas me subieron junto a un grupo de aproximadamente 30 prisioneros a una micro del ejército que nos condujo hasta los recintos del astillero ASMAR ubicado en calle 21 de Mayo, donde nos embarcaron en una barcaza de la Armada que nos trasladó a Isla Dawson. Durante la travesía los soldados se comportaban en forma agresiva, apuntándonos a las cabezas con sus armas listas para disparar. Íbamos muy apretados, prohibiéndonos hablar y hacer preguntas. Tampoco se nos permitió ir al baño.”

“Llegamos a una playa de Isla Dawson, donde nos hicieron desembarcar a través de un tablón, algunos compañeros cayeron a las heladas aguas del estrecho. Había nieve y hacía mucho frío. Nos hicieron subir a unos camiones que nos llevaron al campamento COMPINGIM. Ahí nos ingresaron en un salón grande, como comedores del personal y nos fueron llamando de a uno, para una revisión médica. Durante la madrugada llevaron a los prisioneros hasta una barraca provista de literas y un tambor de aceite cortado por la mitad.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHXCXHJPX

A la mañana siguiente, nos hicieron levantar muy temprano para formar y cantar la canción nacional mientras se izaba la bandera. Todos los días nos daban café con un pan. Las letrinas estaban situadas sobre un riachuelo que cruzaba el campamento, y aguas arriba de este riachuelo todos los días al levantarnos nos debíamos asear. Tiempo después se instalaron duchas.”

“A partir del segundo día nos obligaron a realizar trabajos forzados, como cortar árboles que luego eran usados como postes de luz, cargar troncos, hacer los hoyos para enterrar los postes, cargar y aplastar ripio para arreglar los caminos de la isla y los accesos al campamento, siempre escoltados por guardias armados que no escatimaban ocasión para golpearnos. Debíamos trabajar todos los días hasta aproximadamente las seis de la tarde. El campo, siempre estuvo totalmente custodiado, día y noche con centinelas por fuera de las alambradas.”

“Durante la noche, guardias armados ingresaban a la barraca, y con mucha violencia, preguntaban por algún prisionero en particular a quien sacaban a la fuerza sin darle tiempo para vestirse, luego de lo cual se escuchaban a lo lejos alaridos de las torturas. El día 18 o 19 de septiembre, llegó al campamento personal militar que desató su violencia contra los prisioneros, con golpes, gritos.”

“A mediados de octubre, no recuerdo la fecha exacta, fui llamado junto con varios prisioneros por el jefe de guardia para que nos alistáramos dado que nos llevarían a Punta Arenas, al parecer para ser liberados. Nos condujeron en un camión hasta una playa donde nuevamente nos hicieron subir a una barcaza de la Armada”.

“Durante la noche, llegamos a Punta Arenas y una vez ahí fuimos conducidos hasta el regimiento blindado, en Ojo Bueno. En dicho lugar nos metieron en un container de 40 pies, cuyo piso estaba cubierto de polvo de cemento. Estaba todo oscuro y no podíamos ver nada. Entre los compañeros nos abrazamos y pasamos la noche hasta el día siguiente cuando los guardias abrieron la puerta vimos que estábamos llenos de polvo.”

“Cada cierto tiempo abrían las puertas del container para llevarnos a todos por los cerros de los alrededores, siempre fuertemente custodiados, para que hiciéramos nuestras necesidades. Nos daban un café muy frío y pan, así como una olla que ponían en la puerta para sacar sopa, la cual estaba tapada de grasa y era imposible de comer. Nadie nos comunicó qué sucedía ni hasta cuando debíamos permanecer allí.”

“El 31 de octubre del año 73, nos sacaron muy temprano del container, y nos vendaron fuertemente los ojos y luego nos subieron atrás de un vehículo, estibados como animales, unos encima de otros y llevados al



Foja: 1

centro de torturas en calle Colón, donde nos comenzaron a golpear y dar patadas indiscriminadamente. Luego nos hicieron pasar aparentemente por unos túneles, ya que los guardias pedían que nos agacháramos y que camináramos en cuclillas para después subir unas escaleras, hasta un recinto en que podían oírse gritos muy dramáticos de personas que estaban siendo torturados. Nos hicieron caminar de una pared a otra, al parecer en los rincones de alguna habitación, mientras constantemente nos pegaban en los brazos. ”

“Después de un rato, me llevaron a una dependencia donde me tendieron en un somier de alambre. Ahí me colocaron en la palma de mano un cable con una moneda o algo parecido y luego me amarraron la mano y en la sien debajo del vendaje le pusieron otra igual. Entonces empezaron a hacerme preguntas como dónde estaban las armas y que hacía, con quién me reunía, mientras me daban fuertes golpes de corriente. Experimentando un dolor indescriptible, imploré que se detuvieran jurándoles que no sabía nada acerca de lo que estaban preguntando. Esta tortura duró mucho tiempo, quedando con la boca muy seca. También me pusieron un arma en la mano para que me diera un tiro, diciéndome que mi mujer estaba con otra persona y ya no me necesitaba. Después de mucho tiempo me obligaron firmar totalmente vendado una declaración. Después de esa sesión de tortura fuimos conducidos nuevamente al mismo container hacinados como animales. ”

“Estuvimos en ese container varias semanas, sufriendo tratos vejatorios y humillantes por parte de los guardias que nos llevaban la comida. Salíamos únicamente para hacer nuestras necesidades y siempre bajo una fuerte vigilancia. Durante las noches no se podía dormir ya que los centinelas golpeaban constantemente el container con sus armas ”.

“Un día se abrió la puerta del container y apareció un oficial de muy buenas maneras, quien indicó que era el nuevo Comandante del Regimiento, y que venía llegando de Santiago. Recuerdo que entre los detenidos había una persona que lo conocía de antes, pues habían sido vecinos durante su niñez y juventud. Al reconocerse se abrazaron. Entonces, el Comandante impartió inmediatamente una orden para que nos trasladaran a una dependencia del Regimiento, que nos llevaran a las duchas y que nos prepararan algo para comer. Luego por primera vez nos dieron un café con leche caliente y pan. A partir de ese día pudimos dormir en camas individuales con sábanas y frazadas y nos empezaron a dar el mismo rancho del personal. El nuevo Comandante nos informó que no permitiría que los servicios de inteligencia que acudían diariamente a buscar gente para interrogarla bajo tortura volviera a llevarse a algún detenido. El 12 de diciembre de 1973 fui liberado desde el Batallón Blindado N° 5 del Campamento “General Schneider”.



«RIT»

Foja: 1

Mi registro como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura es el N° 2.735. ”

Por último, transcribe el relato de don **Héctor Manuel Vera Cárdenas**, detenido durante 151 días, desde el 12 de septiembre de 1973, hasta el 9 de febrero de 1974, quien manifestó *“Me desempeñaba hasta el día de golpe como encargado de Prevención de Riesgos en la Lanera Austral. Asimismo, era Secretario del Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de Lanera Austral Empresa del Estado, en Punta Arenas. Militante del Partido Comunista de Chile. ”*

“Fui detenido el 12 de septiembre de 1973, al presentarme en el Regimiento N° 10 Pudeto luego de haber sido llamado en un bando militar.

En una fecha que no recuerdo, fui torturado y flagelado con apremios físicos golpes y puntapiés, aplicación de electricidad y otras crueldades en el antiguo Hospital Naval ubicado en Avda. Colon 536, que fue transformado en el siniestro centro de torturas denominado la “Casa de la Risa ”.

Me tuvieron prisionero y confinado en el Regimiento Pudeto hasta el 21 de diciembre de 1973, día en que fuimos trasladados al Campo de Concentración de Prisioneros Río Chico de la Isla Dawson ”.

“Allí quedé recluso en la Barraca Charly, signado como el prisionero C-75. En esa inhóspita isla nos obligaban a efectuar trabajos muy pesados cargando troncos, angarillas con tierra y arena o cavar hoyos para instalar postes, etc. ”.

“Finalmente fui traslado a Punta Arenas el 9 de febrero de 1974, siendo liberado ”.

“Con anterioridad al golpe militar, el día 4 de septiembre de 1973 había sido detenido arbitrariamente por la Policía de Investigaciones de Chile y luego trasladado en un vehículo militar a la cárcel pública, donde se me mantuvo preso durante unos días, junto a los otros dirigentes de Lanera Austral Punta Arenas.

Mi registro como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura es el N°25.982. ”

Bajo el subtítulo “El derecho”, se refiere a las normas y tratados internacionales suscritos por Chile aplicables al caso, tales como la Declaración Universal de derechos humanos, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, entre otros.

Luego, bajo el subtítulo “el daño moral y su reparación”, sostiene que en el caso de los demandantes, las violaciones sistemáticas ejecutadas por órganos estatales en el cumplimiento de una política terrorista del Estado,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHXCXHJPX

Foja: 1

produjeron considerable, indeleble, profundo, extenso y perdurable daño moral que marcó para siempre sus vidas, que las privó de libertad, de la compañía de sus familias, de sus amigos, de sus compatriotas, de su Patria, del goce de una existencia plena, libre de asechanzas, de peligros, de riesgos, de escuadrones de la muerte o “comandos conjuntos”, de esbirros de la DINA o la CNI, de militares y marinos. Las víctimas padecieron y siguen padeciendo terror, miedo, angustia, aflicción, dolor, pesar, desesperanza. Agrega que su salud fue gravemente afectada, no solamente por los padecimientos físicos, que ya fueron horribles, sino por las consecuencias psicosomáticas que son un efecto de la tortura y todas las violaciones y privaciones sufridas.

Tras mencionar doctrina sobre el tema, señala que en el caso de los demandantes y en general de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestra Patria desde septiembre de 1973, la lesión o violación de los derechos de las víctimas ha ocurrido en el plano de los derechos fundamentales de las personas, inherentes e inseparables de su condición humana, lo cual ha causado un inconmensurable daño. Explica que el daño moral, por su naturaleza, requiere que la reparación sea una indemnización que proporcione las bases para obtener goces equivalentes que compensen la pérdida, sufrimiento, dolor, aflicción, pesar.

Afirma que el Estado tiene la obligación de reparar el daño causado a los demandantes, tanto en virtud de la normativa internacional citada, así como en virtud de diversas normas legales internas que así lo establecen, a saber, los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución, el artículo 2, 3 y 4 de la Ley N° 18.575, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2314 del Código Civil.

Seguidamente, bajo el subtítulo “Imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida”, alega que aplicar el derecho común a casos de delitos de lesa humanidad es un error, toda vez que ello resultaría un incumplimiento por parte del Estado de Chile a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, así como una transgresión directa a lo establecido en el inciso 2° del artículo 5 de la Constitución y otras normas propias de nuestro ordenamiento jurídico.

Asevera que la jurisprudencia de nuestros tribunales, especialmente aquella de la Corte Suprema, es uniforme en cuanto a considerar la inaplicabilidad de las normas sobre prescripción contenidas en nuestro Código Civil, no sólo en atención a los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, sino que igualmente en virtud de normas internas tales como aquellas contenidas en los artículos 3° y 4° de la ley 18.575 y en el artículo 6° de la Constitución, entre otros. Cita y transcribe varios fallos en apoyo de sus argumentos.



«RIT»

Foja: 1

Previas citas, pide tener por interpuesta demanda en procedimiento de hacienda, por responsabilidad del Estado en sede extracontractual, en contra del Fisco de Chile, representado por el presidente del Consejo de Defensa de Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, ambos ya individualizados, solicitando se acoja en todas sus partes, disponiendo:

I.- Que se condena al Fisco de Chile a pagar la suma de \$500.000.000.- a cada uno de los demandantes, por concepto de indemnización por el daño moral sufrido, o aquella suma superior o inferior de dinero que el tribunal estime conforme a justicia, equidad, al mérito del proceso y a derecho;

II.- Que se condena al Fisco de Chile a pagar las siguientes sumas de dinero por concepto de indemnización por el daño moral sufrido, a razón de \$500.000 por cada día de prisión política sufrida por los demandantes, o aquella suma superior o inferior de dinero que el tribunal estime conforme a justicia, equidad, al mérito del proceso y a derecho:

- A) Respecto de don GONZALO ANANÍAS GONZÁLEZ VARGAS:
\$132.500.000, por los 265 días de prisión política.
- B) Respecto de don MIGUEL ÁNGEL RUIZ HENRIQUEZ:
\$71.000.000, por los 142 días sufridos de prisión política.
- C) Respecto de don ROLANDO JACOBO NEIRA GAVILÁN:
\$154.500.000, por 309 días de prisión política.
- D) Respecto de don JOVINO GUALA SÁNCHEZ: \$70.000.000, por los 140 días sufridos de prisión política.
- E) Respecto de don ANTONIO RAFAEL BIANCHI PANICUCCI:
\$74.000.000, por los 148 días sufridos de prisión política.
- F) Respecto de don LIBORIO BARRIENTOS OYARZÚN:
\$133.000.000, por los 266 días sufridos de prisión política.
- G) Respecto de don SERGIO ALFONSO BARRÍA BARRÍA:
\$229.000.000, por los 458 días sufridos de prisión política.
- H) Respecto de don HÉCTOR MANUEL VERA CÁRDENAS:
\$75.500.000, por los 151 días sufridos de prisión política.

III.- Que se condena al Fisco de Chile al pago de las sumas de dinero a las que sea condenado más los reajustes e intereses que se generen desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o durante el periodo que el tribunal determine procedente conforme a derecho.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHXCXHJPX

«RIT»

Foja: 1

IV.- Que se condena al Fisco de Chile al pago de las costas de la causa.

Con fecha 03 de septiembre del año 2020, folio 10, se notificó la demanda a don Juan Antonio Peribonio Poduje, en representación del Consejo de Defensa del Estado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A través de presentación ingresada por Oficina Judicial Virtual de fecha 23 de septiembre de 2020, a folio 11, comparece doña Ruth Israel López, abogada procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contesta la demanda solicitando su total rechazo, conforme a los argumentos que expone.

Tras efectuar una síntesis de la demanda, opone excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados todos los demandantes. Indica que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos sino se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional.

En efecto continúa, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior -y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada Justicia Transicional. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Agrega que, en efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Por otro lado, manifiesta que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHCXHXJPX

Foja: 1

exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Señala que estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ellas. Asevera que no debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Seguidamente, expone la complejidad reparatoria, citando a Lira, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron "(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse".

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas".

Refiere que en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el ejecutivo, siguiendo aquel informe, entendió por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en un "proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias



más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Añade que, de esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto. La noción de reparación por el dolor de las vidas perdidas es encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la responsabilidad extracontractual del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18. Asumida esta idea reparatoria, señala, la ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

En este sentido, indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones permitirá verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Bajo el subtítulo “Reparación mediante transferencias directas de dinero”, afirma que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destaca que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, algunos sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero, mientras otros, abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines resarcitorios.



Foja: 1

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de: a) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y b) \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); c) Bonos: la suma de \$41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la referida Ley 19.992; d) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123 y; e) bono extraordinario (ley 203874): la suma de \$21.256.000.000.- Concluye que a diciembre de 2015, el Fisco ha desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Manifiesta que, desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que pueda valorizarse para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Indica que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Agrega que como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose de ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Refiere luego, las reparaciones específicas. Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos. Señala que los actores han recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N° 19.992 y sus modificaciones. Indica que la Ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas.

Afirma que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Añade que adicionalmente, cabe consignar que los actores recibieron en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874 por \$1.000.000.-



Acto seguido, alude a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas. Manifiesta que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación se realiza no sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones.

Hace ver que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del País. Indica que para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Expresa que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y con atención exclusiva a beneficiarios del programa. Adicionalmente, detalla otros tipos de beneficios a los beneficiarios y sus familias, en particular en el ámbito educacional.

Luego, expresa que, dentro de las reparaciones simbólicas, es importante que, en los procesos de justicia transicional, que la reparación de los daños morales causados a las víctimas de DDHH se realice mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, no a través de dinero sino mediante una reparación del dolor y tristeza producidos. Evidencia que parte de ello fue la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, el establecimiento mediante el Decreto N° 121, de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros.

Bajo el subtítulo “identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas”, sostiene que tanto las indemnizaciones que se solicitan en autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de manera que no procede repararlos nuevamente. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus argumentos.

Reclama que dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de la reparación.

Concluye que estando las acciones interpuestas en estos autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias que enunció anteriormente, y de acuerdo a los documentos oficiales que según dice acompañará a los



«RIT»

Foja: 1

autos, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizados por el Estado todos los demandantes de la presente causa.

Acto seguido, alega la prescripción extintiva de la acción de conformidad a los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Hace ver que según el relato efectuado por los demandantes, la detención ilegal, prisión política y torturas que sufrieron, ocurrieron desde el 11 de septiembre de 1973 y hasta los periodos relatados en cada caso, de manera que entendiendo suspendida la prescripción durante el periodo de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, el 03 de septiembre de 200, ha transcurrido en exceso el plazo de 4 años de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332. Luego, en subsidio de lo anterior, opone excepción de prescripción de 5 años de conformidad a los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Ahondando en los argumentos que sostienen la prescripción invocada, sostiene que la imprescriptibilidad de las acciones es excepcional, requiriendo siempre una declaración explícita, la que en este caso no existe. Añade que las normas de prescripción se aplican a favor y en contra del Estado. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus alegaciones.

Por otro lado, expone que los tratados internacionales invocados por el actor, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil, sino únicamente se refieren a la responsabilidad penal, citando jurisprudencia en este sentido.

Finalmente, postula que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, esto es, el artículo 2332 del Código Civil, y, en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil.

En último término, se refiere al daño e indemnización reclamada, manifestando que lo demandado sería exorbitante y carecería de fundamento, puesto que los actores formularon una doble pretensión indemnizatoria, sin justificación alguna. Concluye que la primera pretensión cae de lleno en el lucro sin causa, pues no encuentra justificación en daño alguno, ya que el daño moral por la prisión, que conlleva todo el padecimiento que esta produce se expresa en una pretensión distinta de quinientos mil pesos por cada día de privación de libertad.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHXCXHJPX

Foja: 1

Añade que, el daño moral, es de naturaleza extrapatrimonial pues corresponde a sufrimientos, angustia, dolor, pesar, etc. Sin embargo, el demandante pretende cuantificar este daño moral en la exorbitante suma de \$ 500.000.- por cada día de prisión, acercándose esta forma de valorar el pretendido daño moral por prisión, más al daño material y específicamente al daño por lucro cesante, en que efectivamente debe considerarse lo que el afectado ganaba producto de su trabajo y que no puede percibir, como consecuencia del daño o lesión que ha experimentado y como se señala en el libelo, el único daño demandado es por daño moral.

Alega que las pretensiones indemnizatorias, carecen de fundamento preciso y sólido y además resultan contradictorias, lo que revela más bien un ánimo de lucro y una doble indemnización por un mismo hecho, lo cual es jurídicamente improcedente. Sostiene que, sin perjuicio de lo anterior, con relación al daño moral que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo.

En subsidio de las excepciones anteriores, de reparación y prescripción, solicita que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado (Ley 19.992, sus modificaciones y demás normas pertinentes), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. Indica que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Por otro lado, indica que los intereses se deben solo cuando el deudor ha sido reconvenido y retardado el cumplimiento de la sentencia.

Mediante presentación ingresada por OJV de fecha 05 de octubre del año 2020, a folio 15, la parte demandante evacuó el trámite de réplica, reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda de autos, e indica que la contraria no discutió los hechos que han sido invocados en la demanda.

A través de presentación ingresada por OJV con fecha 15 de octubre del año 2020, folio 17, la parte demandada evacuó la réplica, manifestando



«RIT»

Foja: 1

que reitera todas las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en su escrito de contestación de demanda.

Acto seguido, reafirma su excepción de reparación integral, en tanto que la pensión otorgada al actor tuvo un claro fin reparatorio del daño moral y no una mera pensión de sobrevivencia, citando jurisprudencia al efecto. Luego, arguye que la acción indemnizatoria de autos si prescribe lo cual habría sido reconocido por la Excma. Corte Suprema, al aplicar el artículo 2332 del Código Civil.

Por resolución de fecha 21 de octubre del año 2020, a folio 18, se recibió la causa a prueba por el término legal, notificándose a ambas partes con fecha 14 de abril de 2021, según consta a folios 23 y 24.

Por resolución de fecha 21 de octubre de 2021, a folio 29, previa solicitud de la parte demandante, se ordenó la reactivación de la causa, notificándose dicha resolución a la parte demandada con fecha 22 de diciembre de 2021, a folio 31.

Con fecha 16 de mayo del año en curso, a folio 48, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en estos autos, don Gonzalo Ananías González Vargas, don Miguel Ángel Ruiz Henríquez, don Rolando Jacobo Neira Gavilán, don Jovino Guala Sánchez, don Antonio Rafael Bianchi Panicucci, don Liborio Barrientos Oyarzún, don Sergio Alfonso Barría Barría y don Héctor Manuel Vera Cárdenas, debidamente representados, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por el presidente del Consejo de Defensa del Estado don Juan Antonio Peribonio Poduje, todos ya individualizados, a fin de que se condene a este último, al pago de las sumas señaladas en el petitorio de su demanda, por los daños morales sufridos a consecuencia de la detención ilegal, torturas y vejaciones a que se vieron sometidos desde el año 1973 y por diversos periodos de tiempo en cada caso.

SEGUNDO: Que por su parte el demandado Fisco Chile compareció a la instancia contestando y duplicando la demanda de autos, solicitando en definitiva el rechazo de la demanda en todas sus partes, oponiendo las excepciones de reparación satisfactiva y la de improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizados los demandantes. Seguidamente, alega la prescripción extintiva de la acción por haber transcurrido en exceso el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil cuya aplicación estima procedente, y en subsidio, la prescripción extintiva ordinaria de 5 años, objetando, en subsidio de todo lo anterior, sostiene que los actores piden una doble indemnización por el mismo daño sufrido, lo cual según dice es improcedente, sin perjuicio de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHXCXHJPX

Foja: 1

ello, solicita que en la regulación de éste se consideren los pagos, pensiones e indemnizaciones que han recibido los demandantes.

TERCERO: Que la presente controversia radica en determinar si en la especie concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial del Estado y, en consecuencia, si el Fisco se encuentra obligado a indemnizar el daño moral reclamado por los actores, fundado en las detenciones ilegales, privación de libertad y torturas que experimentaron en el contexto político del régimen militar de 1973.

CUARTO: Que la responsabilidad civil tiene por finalidad reparar económicamente a la víctima o con mayor precisión, compensar el daño sufrido por ésta como consecuencia de un hecho ilícito. En este sentido, lo que se busca es proporcionar a la víctima, una cantidad de dinero que le permita sobrellevar de mejor manera el daño sufrido, mediante el goce y disfrute de otras cosas, atendido el carácter transaccional de éste. En razón de ello, se dice que la indemnización monetaria no es una genuina reparación, pues no hace desaparecer el daño ni mucho menos el hecho generador de éste, sino que más bien, otorga los medios económicos a la víctima para que ésta encuentre satisfacción en la adquisición de bienes o servicios.

QUINTO: Que, en lo concerniente a la responsabilidad del Estado y sus órganos, el principio general expresado anteriormente se ha concretizado bajo la institución de la falta de servicio, criterio general de atribución equivalente a la culpa o negligencia que funda la reparación de los daños extracontractuales. De aquí que la doctrina y jurisprudencia, estimen que la responsabilidad civil o patrimonial de los órganos públicos puede ser perseguida, ya sea de acuerdo a las normas de derecho público (Constitución Política de la República, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, etc.), como a partir de la normativa de derecho privado (arts. 2314 y ss. del Código Civil).

SEXTO: Que en este sentido si bien en la actualidad, es un lugar común hablar de la unidad de responsabilidades públicas y privadas a fin de garantizar reglas y principios equitativos para los particulares que buscan la reparación de sus daños ocasionados por el Estado, ello no conlleva un desconocimiento de las peculiaridades de las relaciones de derecho público (administrativa, legislativa y judicial), en particular, respecto del complejo contenido y finalidad que el órgano estatal persigue con cada una de sus actuaciones.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados a los actores, encuentra también su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo



«RIT»

Foja: 1

dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

OCTAVO: Que estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

NOVENO: Que a fin de acreditar lo correspondiente, la parte demandante acompañó los siguientes documentos a la carpeta electrónica: 1) copia de Informe Protocolo Estambul N° 03-2018 emitido por el Servicio Médico Legal de Punta Arenas, correspondiente a don Jovino Guala Sánchez, acompañado a la causa rol N° 2-2017 seguida ante la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marta Jimena Pinto Salazar; 2) copia de Informe Protocolo Estambul N° 06-2018 emitido por el Servicio Médico Legal de Punta Arenas, correspondiente a don Sergio Alfonso Barriá Barriá, acompañado a la causa rol N° 2-2017 seguida ante la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marta Jimena Pinto Salazar; 3) copia de Informe Protocolo Estambul N° 01-2018 emitido por el Servicio Médico Legal de Punta Arenas, correspondiente a don Gonzalo Ananías González Vargas, acompañado a la causa rol N° 2-2017 seguida ante la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marta Jimena Pinto Salazar; 4) copia de Informe Protocolo Estambul N° 173-2017 emitido por el Servicio Médico Legal de Concepción, correspondiente a don Héctor Manuel Vera Cárdenas, acompañado a la causa rol N° 2-2017 seguida ante la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marta Jimena Pinto Salazar; 5) copia de Informe Protocolo Estambul N° 05-2018 emitido por el Servicio Médico Legal de Punta Arenas, correspondiente a don Liborio Barrientos Oyarzún, acompañado a la causa rol N° 2-2017 seguida ante la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marta Jimena Pinto Salazar; 6) copia de Informe Protocolo Estambul N° 02-2018 emitido por el Servicio Médico Legal de Punta Arenas, correspondiente a don Miguel Ángel Ruiz Henríquez, acompañado a la causa rol N° 2-2017 seguida ante la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marta Jimena Pinto Salazar; 7) copia de Informe Protocolo Estambul N° 154-2017 emitido por el Servicio Médico Legal de Concepción, correspondiente a don Rolando Neira Gavilán, acompañado a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHCXHJPX

Foja: 1

la causa rol N° 2-2017 seguida ante la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marta Jimena Pinto Salazar; 8) copia de Informe Protocolo Estambul N° 04-2018 emitido por el Servicio Médico Legal de Punta Arenas, correspondiente a don Antonio Rafael Bianchi Panicucci, acompañado a la causa rol N° 2-2017 seguida ante la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marta Jimena Pinto Salazar; 9) copia de Informe de la Visita al Campo de Detenidos del Regimiento “Pudeto”, con fecha de visita el 11 de diciembre de 1973 y Relación de Personal de Detenidos en el Regimiento “Pudeto” al 6 de diciembre de 1973; 10) copia de Informe de la visita al campo de detenidos del Regimiento Blindado N°5 “Campamento Gral. R. Schneider”, con fecha de visita 12 de diciembre de 1973, y Relación Nominal de Detenidos y Detenidas en el Batallón Blindado N°5, al 12 de noviembre de 1973; 11) copia de Informe de Visita al Estadio Fiscal de Punta Arenas (Recinto Aéreo), con fecha de visita 13 de diciembre de 1973, y Relación de Detenidos en la IV Brigada Aérea, de fecha 13 de diciembre de 1973; 12) copia de Informe de la Visita al Campo de Confinación Isla Dawson, con fecha de visita 12 de diciembre de 1973, y Relación Nominal de Confinados en Isla Dawson, al 12 de diciembre de 1973; 13) copia de Informe Sobre la Visita al Campo de Confinación de la Isla Dawson “Rio Chico”, con fecha de visita 22 de enero de 1974; 14) copia de certificado de fecha 08 de julio de 2016 otorgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, “CICR” (International Committee of the Red Cross), relativo a las visitas efectuadas por delegados en los lugares de detención, correspondiente a Sergio Alfonso Barría Barría, y carta conductora de fecha 20 de julio de 2016; 15) copia de certificado de fecha 12 de abril de 2016 otorgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, “CICR” (International Committee of the Red Cross), relativo a las visitas efectuadas por delegados en los lugares de detención, correspondiente a Liborio Barrientos Oyarzún, y carta conductora de fecha 17 de mayo de 2016; 16) copia de certificado de fecha 16 de febrero de 2016 otorgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, “CICR” (International Committee of the Red Cross), relativo a las visitas efectuadas por delegados en los lugares de detención, correspondiente a Antonio Rafael Bianchi Panicucci, y carta conductora de fecha 08 de marzo de 2016; 17) copia de certificado de fecha 30 de diciembre de 2015 otorgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, “CICR” (International Committee of the Red Cross), relativo a las visitas efectuadas por delegados en los lugares de detención, correspondiente a Jovino Guala Sánchez, y carta conductora de fecha 12 de febrero de 2016; 18) copia de certificado de fecha 18 de mayo de 2016 otorgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, “CICR” (International Committee of the Red Cross), relativo a las visitas efectuadas por delegados en los lugares de detención, correspondiente a Rolando Jacobo Neira Gavilán, y carta conductora de fecha 06 de junio de 2016; 19) copia de certificado de fecha 28 de diciembre de 2015 otorgado por el Comité Internacional de la Cruz



Foja: 1

Roja, “CICR” (International Committee of the Red Cross), relativo a las visitas efectuadas por delegados en los lugares de detención, correspondiente a Miguel Ángel Ruiz Henríquez, y carta conductora de fecha 12 de febrero de 2016; 20) copia de certificado de fecha 17 de junio de 2016 otorgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, “CICR” (International Committee of the Red Cross), relativo a las visitas efectuadas por delegados en los lugares de detención, correspondiente a Héctor Manuel Vera Cárdenas, y carta conductora de fecha 07 de julio de 2016; 21) Impresión de página web del diario “La Prensa Austral”, relativo a crónica de fecha 13 de marzo de 2017, titulada *“Los caminos de la vida que llevaron a un ex preso político a convertirse en miembro clave de Amnistía Internacional en Dinamarca”*; 22) Impresión de página web titulada *“Los últimos prisioneros políticos de la Isla Dawson, foto septiembre 1974”*.

DÉCIMO: Que, a solicitud de la parte demandante, se ordenó oficiar a la Ministra en Visita Extraordinaria, doña Marta Jimena Pinto Salazar de la Il. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, a efectos de que remita a este tribunal copia íntegra, ya sea de forma electrónica o física, de los expedientes de las causas criminales referidas a cada uno de los demandantes en estos autos.

Con fecha 11 de abril de 2022, a folio 42, se recepcionó Oficio N° 59-2022-DDHH, proveniente de la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marta Pinto Salazar, quien remitió la copia digital de la querella penal interpuesta por los demandantes y su respectiva resolución que la provee con fecha 11 de julio de 2019, excusándose de enviar los expedientes en forma íntegra atendido que las respectivas causas se encuentran en etapa de sumario y cuyo conocimiento es reservado.

UNDÉCIMO: Que, previa solicitud de la parte demandada, se ordenó oficiar al Departamento Gestión de Beneficios Subdepartamento Leyes Reparatorias Unidad Valech, Rettig y Otros Beneficios Reparatorios del Instituto de Previsión Social, a fin de que informe acerca de los bonos de reparación o beneficios previsionales, asistenciales o de otra índole que como beneficiarios de la Ley N°19.234, 19.992 y 20.874 se hubiesen otorgado a los demandantes de autos.

Con fecha 15 de febrero del año en curso, a folio 39, se recepcionó Oficio DSGT N° 4792-5363 proveniente del Instituto de Previsión Social, del cual se extrae la siguiente información:

- Gonzalo González Vargas, ha recibido la cantidad de \$38.748.197.- entre agosto de 2003 a febrero de 2022, que incluye Bonos Ley N° 19.992 por \$3.000.000.- y Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$603.196.-, ascendiendo la pensión actual a \$210.070.-;
- Miguel Ruiz Henríquez, ha recibido la cantidad de \$41.610.376.- entre septiembre de 1999 a febrero de 2022, que incluye Bonos Ley N° 19.992 por \$3.000.000.- y Ley N° 20.874 por \$1.000.000.-



- y aguinaldos por \$676.179.-, ascendiendo la pensión actual a \$198.739.-;
- Rolando Neira Gavilán, ha recibido la cantidad de \$43.028.181.- entre septiembre de 1998 a febrero de 2022, que incluye Bonos Ley N° 19.992 por \$3.000.000.- y Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$692.503.-, ascendiendo la pensión actual a \$200.545.-;
 - Jovino Guala Sánchez, ha recibido la cantidad de \$40.559.082.- entre marzo de 2005 a febrero de 2022, que incluye Bonos Ley N° 19.992 por \$3.000.000.- y Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$562.653.-, ascendiendo la pensión actual a \$237.798.-;
 - Antonio Bianchi Panicucci, ha recibido la cantidad de \$36.663.429.- entre febrero de 2005 a febrero de 2022, que incluye Bono Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$562.653.-, ascendiendo la pensión actual a \$237.798.-;
 - Liborio Barrientos Oyarzún, ha recibido la cantidad de \$46.742.832.- entre febrero de 2005 a febrero de 2022, que incluye Bonos Ley N° 19.992 por \$3.000.000.- y Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$692.503.-, ascendiendo la pensión actual a \$237.796.-;
 - Sergio Barría Barría, ha recibido la cantidad de \$34.761.705.- entre febrero de 2005 a febrero de 2022, que incluye Bono Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$562.653.-, ascendiendo la pensión actual a \$237.796.-;
 - Héctor Vera Cárdenas, ha recibido la cantidad de \$34.050.925.- entre marzo de 2005 a febrero de 2022, que incluye Bono Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$562.653.-, ascendiendo la pensión actual a \$227.185.-

DUODÉCIMO: Que, de las probanzas rendidas por la demandante, las únicas pruebas objetivas acerca de la efectividad de haberse producidos los hechos reclamados por los actores corresponden a los informes de visitas a los diversos campos de detención aparejados al expediente, ello por cuanto los informes emitidos por el Servicio Médico Legal, si bien constatan una serie de padecimientos físicos y emocionales sufridos por los demandantes, los enunciados fácticos consignados en estos no constituyen medio de prueba idóneo para la acreditación de los actos ilícitos que se imputan, máxime si se trata de declaraciones efectuadas por los propios afectados ante la entidad de salud.

Por su parte, la querella interpuesta ante la Ministra en Visita Extraordinaria Sra. Pinto, que fuera aparejada en virtud de oficio remitida por ésta última, tampoco tiene la aptitud de ser prueba de los hechos denunciados, máxime si en dicha causa penal aún no se ha dictado sentencia definitiva condenatoria que produzca cosa juzgada en materia civil



Foja: 1

conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil.

Por último, en torno a impresiones de páginas web reseñadas en los numerales 21) y 22) del motivo 9º, por su propia naturaleza de documentos electrónicos conforme a lo dispuesto en la letra d) del art. 2 de Ley N° 19.799, la demandante debió haber instado a la percepción documental de estos conforme a lo dispuesto en el artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual carecen de todo valor probatorio.

DÉCIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, consta que todos los actores han sido reconocidos formalmente como víctimas de violaciones a los derechos humanos en época de dictadura, lo cual se desprende de los aludidos informes y certificados de visitas a centros de detención asociados a cada uno de ellos, además de la información emitida por el Instituto de Previsión Social en que aparecen registrados como beneficiarios de prestaciones pecuniarias por el Estado, por lo que, a la luz de lo anterior, resulta posible tener por acreditada la efectividad de lo siguiente:

- 1) Gonzalo Ananías González Vargas, cédula de identidad N° 4.720.446-1, actualmente de 81 años de edad, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 10.540.

Estuvo detenido el Regimiento N° 10 “Pudeto”, en la ciudad de Punta Arenas, a lo menos, entre septiembre a diciembre de 1973. Asimismo, estuvo en el campo de confinación de la Isla Dawson “Río Chico”, al norte de Puerto Harris, por un periodo indeterminado a contar del 22 de enero de 1974.

- 2) Miguel Ángel Ruiz Henríquez, cédula de identidad N° 5.939.614-5, actualmente de 74 años de edad, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 21.775.

Estuvo detenido el Regimiento N° 10 “Pudeto”, en la ciudad de Punta Arenas, a lo menos, entre septiembre a diciembre de 1973. Asimismo, estuvo detenido en la Isla Dawson, Barraca “Charlie”, según da cuenta la visita al lugar el 22 de enero de 1974.

- 3) Rolando Jacobo Neira Gavilán, cédula de identidad N° 3.564.833-K, actualmente de 79 años de edad, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 16.736.

Estuvo detenido el Regimiento N° 10 “Pudeto”, en la ciudad de Punta Arenas, a lo menos, entre septiembre a diciembre de 1973. Asimismo, estuvo detenido en la Isla Dawson, Barraca “Charlie” al 22 de enero de 1974 y en el Campamento Cochranne al 12 de julio de 1974, según dan cuenta las visitas a estos recintos.



Foja: 1

- 4) Jovino Guala Sánchez, cédula de identidad N° 3.529.951-3, actualmente de 89 años de edad, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 10.690.

Estuvo detenido en el Estadio Fiscal de Punta Arenas (recinto aéreo), en las afueras de la ciudad de Punta Arenas, a lo menos en entre septiembre y diciembre de 1973 y a continuación en Isla Dawson, Barraca “Bravo” conforme a visita de 22 de enero de 1974.

- 5) Antonio Rafael Bianchi Panicucci, cédula de identidad N° 4.429.156-8, actualmente de 83 años de edad, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 3.165.

Estuvo detenido en Isla Dawson en septiembre de 1973, luego llevado al Campamento “General Schneider” en Punta Arenas según consta en visita de 03 de noviembre de 1973 y, por último, llevado nuevamente a Isla Dawson según visita del 22 de enero de 1974.

- 6) Liborio Barrientos Oyarzún, cédula de identidad N° 4.570.245-6, actualmente de 83 años de edad, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 2.790.

Estuvo detenido en Isla Dawson en septiembre de 1973, luego llevado al Campamento “General Schneider” en Punta Arenas según visita del 03 de noviembre de 1973, volviendo al campamento de confinados en la Isla Dawson al 12 de diciembre de ese mismo año, para luego permanecer en la barraca “A” de ese mismo lugar según visita del 22 de enero de 1974, siendo relegado, finalmente al campamento “Río Chico” Barraca “Alfa” de Isla Dawson al 12 de julio de 1974.

- 7) Sergio Alfonso Barría Barría, cédula de identidad N° 5.155.106-0, actualmente de 78 años de edad, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 2.735.

Estuvo detenido en Isla Dawson Grupo “Eco” Nave N° 2, en septiembre de 1973, luego llevado al Campamento “General Schneider” en Punta Arenas según visita del 03 de noviembre de 1973, para luego permanecer en el Batallón Blindado N° 5 de ese mismo lugar según visita del 12 de diciembre de 1973.

- 8) Héctor Manuel Vera Cárdenas, cédula de identidad N° 6.176.376-7, actualmente de 74 años de edad, ha sido reconocido como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el N° 25.982.

Estuvo detenido el Regimiento N° 10 “Pudeto”, en la ciudad de Punta Arenas, a lo menos, entre septiembre a diciembre de 1973. Asimismo, estuvo detenido en la Isla Dawson, Barraca “Charlie”, según da cuenta la visita al lugar el 22 de enero de 1974.



DÉCIMO CUARTO: Que en relación al primer supuesto, esto es, la existencia de un hecho antijurídico, conforme a la naturaleza de la materia y hechos sobre los que versa la litis, cabe consignar que del mérito de las probanzas reseñadas en los motivos anteriores, ha quedado acreditado en autos, que efectivamente los actores fueron detenidos y privados de libertad en forma ilegal desde septiembre de 1973 por agentes del Estado, pasando por diversos recintos de detención en la ciudad de Punta Arenas e Isla Dawson, en condiciones extremas por la naturaleza y locación geográfica de dicha zona, donde padecieron procedimientos de interrogación y torturas, conocidos por su crueldad e intensidad, hasta su liberación en los diversos periodos ya reseñados en el motivo anterior.

DÉCIMO QUINTO: Que las conductas descritas dan cuenta de la comisión de actos ilegales y arbitrarios, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la vida, la libertad y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa humanidad.

DÉCIMO SEXTO: Que en efecto, consta en la documental ofrecida, en particular en el hecho de que los actores sabidamente son reconocidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos como consta en los registros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, al igual que los antecedentes que obran en el documento remitido por el Instituto de Previsión Social, todo lo cual constituyen prueba irrefutable de la detención ilegal de los demandantes, así como la privación de su libertad de parte de agentes del Estado, circunstancias y antecedentes que permiten a esta juez tener por probada la existencia de los hechos antijurídicos que se invocan, sin perjuicio de encontrarse aún en tramitación la arista penal de este caso tal como fue mencionado por la Ministra en Visita encargada de dicha investigación y juzgamiento.

En consecuencia, ha queda demostrado que el Estado obró con total irrespeto a los derechos humanos al detener y privar de libertad en forma arbitraria e ilegal a cada uno de los demandantes.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que los perjuicios sufridos por los actores aparecen como consecuencia natural y lógica de todo lo vivido, detención ilegal, tortura física, psíquica, así como el hecho de permanecer en diversos recintos en los cuales estuvieron incomunicados por extensos periodos de tiempo, todos hechos que indudablemente afectan de sobremanera la vida de cualquier persona, provocando entre otras cosas, trabas para la estabilidad emocional familiar y social, circunstancias acreditadas por los antecedentes tenidos a la vista, en particular los Informes psicológicos, psiquiátricos y médicos emitidos por el Servicio Médico Legal respecto de cada uno de los afectados, antecedentes que permiten a esta sentenciadora tener por acreditadas los daños reclamados por estos, cuyas consecuencias y secuelas psicológicas se mantienen en la actualidad con el carácter de permanentes según la opinión de los profesionales de dicho Servicio, y que



Foja: 1

por supuesto dan cuenta del vínculo causal entre los hechos delictivos acreditados y el daño padecidos por cada uno de ellos, puesto que de no mediar lo primeros jamás se habrían producido los segundos.

DÉCIMO OCTAVO: Que habiéndose acreditado la existencia del daño moral que se reclama de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde pronunciarse sobre las defensas de la demandada.

DÉCIMO NOVENO: Que en torno a la excepción de *prescripción extintiva* de la acción, incoada plateada por la demandada, huelga tener presente que el hecho que motiva esta acción, es de aquellos que la doctrina y tribunales superiores de justicia reconoce como graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en el motivo 13° ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se vulneraron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

VIGÉSIMO: Que cabe precisar que la acción indemnizatoria que se deduce se encuentra sustentada en las torturas acreditadas que ha sufrido el actor por el Estado Chileno con enorme poder de coerción y uso de fuerza, vulnerándose con aquello lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma última que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes que así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a índole humanitaria proveniente de los derechos de todos ser humano reconocidos en el tratado internacional indicado, que prima de acuerdo a las normas de derecho interno en específico al artículo 2497 del Código Civil.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que por otro lado sustenta la tesis de inaplicabilidad de la norma del Código Civil antes mencionada por el artículo 2° de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5° de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

En efecto, ya la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, por lo que resultaría incoherente entender que la acción de reparación está sujeta a normas de



Foja: 1

prescripción, puesto que ello atenta los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que dado que los Derechos Humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

VIGÉSIMO TERCERO: Que sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

VIGÉSIMO QUINTO: Que de otro lado, debe tenerse presente que no nos encontramos frente a una acción de indemnización de perjuicios “común” que derive de relaciones contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que como se dijo, nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional; así y de acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, es así que habiendo ratificado Chile la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que



Foja: 1

contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

VIGÉSIMO SEXTO: Que por otra parte el artículo 2332 del Código Civil señala que: “*las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto*”; el artículo 2514 señala que: “*la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible*”; finalmente el artículo 2515 de igual cuerpo legal señala que el tiempo es de 5 años para las acciones ordinarias.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en ese contexto, el estatuto del derecho privado chileno regula relaciones entre particulares, regidas por los principios de la autonomía de la voluntad y en plano de igualdad, cuestión inaplicable al caso *sub lite*, donde se busca regular y sancionar en el ámbito de derecho público, relaciones verticales del Estado con los particulares, determinando las responsabilidades que éste tenga por las afectaciones de derechos por parte de sus agentes.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que resulta inconcuso que tratándose del resarcimiento de las transgresiones a los Derechos Humanos, la fuente de responsabilidad civil o el estatuto aplicable, no puede encontrarse en nuestro Código Civil, toda vez que las normas de regulación y protección de tales derechos son posteriores a nuestra codificación, y las ahí contenidas no fueron concebidas por Bello para la solución de problemas contemporáneos, como el de marras, para los cuáles ha devenido el desarrollo de nuevas concepciones al amparo del Derecho Internacional, el que incorporado en virtud del artículo 5º de nuestra Constitución Política, resulta absolutamente vinculante y obligatorio.

VIGÉSIMO NOVENO: Que así, en el caso *sub lite*, la detención ilegal y privaciones de libertad de los actores, constituyen en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo al margen de la juridicidad y constitucionalidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de *Ius Cogens*, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna.

TRIGÉSIMO: Que, en efecto, el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando haya violación de un derecho o libertad habrá derecho al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, y el artículo 1.1 trata de las obligaciones de respeto y garantía por parte de los Estados partes de las disposiciones contenidas en tal pacto, relativas al respeto y protección de derechos fundamentales.



TRIGÉSIMO PRIMERO: Que así resulta improcedente aplicar las normas del Código Civil y declarar prescritas acciones indemnizatorias ordinarias emanadas de violaciones a derechos fundamentales, por ser contrarias al orden jurídico internacional, que traducido en Convenios y Tratados y por clara disposición constitucional, son vinculantes para Chile, como ha reconocido y declarado abundante jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, entre otros, en el homicidio de Fernando Vergara, los denominados caso Liguíña, Caravana de la Muerte -capítulo San Javier-, Secuestro y Desaparición de Darío Miranda Godoy y Jorge Solovera Gallardo y secuestro y desaparición de Sergio Tormen Méndez.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República establecen los principios de igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados, siendo responsables tanto de sus acciones como de sus omisiones, asimismo el artículo 4º de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala que éste será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado, normas que en conjunto con los tratados internacionales vigentes en Chile, reafirman el deber de responder y resarcir los daños, normas que carecerían de toda validez y operatividad de aplicarse las reglas y plazos del derecho común a materias de tan alto dolor y conocimiento público, como son las violaciones a los Derechos Humanos.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, por lo señalado precedentemente, esta sentenciadora estima que los cómputos de los plazos establecidos en los artículos 2332 y 2515 no son aplicables en la especie, entran en directa contradicción con normas internacionales, normas de *Ius Cogens*, el Derecho Consuetudinario y el Derecho Constitucional, desechándose así la prescripción invocada por la demandada.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que seguidamente, en lo tocante a la defensa de la demandada invocada como excepción de “*reparación satisfactiva*”, cabe señalar que, de acuerdo a la información remitida por el Instituto de Previsión Social, los demandantes han recibido beneficios pecuniarios por parte del Estado por el hecho de haber sido calificados como víctimas de violaciones a los derechos humanos, percibiendo cada uno las sumas detalladas en el motivo 11º.

Sobre este punto, huelga precisar al respecto que la Ley 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala, dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios a través de los cuales el Estado Chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una supuesta



Foja: 1

incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, en este sentido, el propio artículo 4° de la citada ley dispone que: “*en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere haber a personas individuales*”, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

En consecuencia, se concluye que aun cuando los actores son beneficiarios, las mencionadas leyes en parte alguna establecieron una incompatibilidad entre los beneficios que otorga y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que asimismo, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral, en consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley 19.123 y 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, cuya cuantía y para el caso que sea procedente será determinada en este juicio.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la acción de indemnización por daño moral impetrada, en caso alguno resulta incompatible con los beneficios que han recibido los actores, a cualquier título y en cualquier momento, de manera tal que se rechazará la excepción alegada de reparación satisfactiva, sin perjuicio de considerarse estos al momento de cuantificar la indemnización por daño moral, como se dirá.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, ahora bien, en torno a la alegación de la demandada consistente en que los actores estarían pidiendo una doble indemnización por el mismo daño ocasionado conforme se desprendería de los numerales I y II del petitorio de la demanda, cabe señalar que, de una atenta lectura de aquellos, se advierte que primeramente se pide una indemnización por daño moral equivalente a \$500.000.000.- para cada uno de los actores y, seguidamente, se reclama otra indemnización por daño moral ésta vez calculada en razón de \$500.000.- por cada día de prisión política que sufrieron los demandantes, en ambos casos otorgando la posibilidad al tribunal se fijar una cantidad diversa.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que, si bien se aprecia una diferencia entre ambos ítems indemnizatorios, pues en el caso del numeral segundo del petitorio se infiere que el daño moral reclamado estaría constituido por los días que cada uno de los actores estuvieron privados de libertad, mientras que en el numeral primero se alude de modo genérico al daño moral sufrido por aquellos, ambos tienen la misma finalidad, la compensación del daño



Foja: 1

extrapatrimonial experimentado por los demandantes, cuya cuantificación queda entregada a la prudencia del juez a la luz de las particularidades de cada víctima.

En este sentido, no resulta procedente establecer una cantidad fija de dinero por cada día de privación de libertad como si fuese una fórmula matemática análoga al lucro cesante, pues el daño moral es eminentemente subjetivo y su magnitud debe ser apreciada a la luz de varios factores, especialmente, la gravedad del daño sufrido por cada uno de los actores, no siendo el mismo para todos ellos.

CUADRAGÉSIMO: Que, en consecuencia, no corresponde acceder conjuntamente a lo pedido en ambos numerales I y II del petitorio, debiendo acotarse la compensación por daño moral a la valuación que esta juez arribe, conforme a la prudencia y, especialmente, a la luz de los antecedentes que obran en la carpeta electrónica respecto de cada uno de los demandantes.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, así las cosas, desechadas que fueren las defensas fiscales, y establecida la existencia del ilícito y su relación causal con los daños y perjuicios invocados, corresponde ponderar los antecedentes que obran en la carpeta electrónica, y particularmente los Informes psicológicos, psiquiátricos y médicos emitidos por el Servicio Médico Legal respecto de cada uno de los demandantes, así como los informes y certificados de visitas que dan cuenta de la estancia de aquellos en los diversos centros de detención militar y cuyo tiempo varía caso a caso:

1) Gonzalo Ananías González Vargas, actualmente de 81 años de edad, estuvo privado de libertad a lo menos por cuatro meses entre septiembre de 1973 y enero de 1974.

Desde la perspectiva psicológica, el informe consigna que el Sr. González se logra adaptar favorablemente ante situaciones nuevas e inesperadas, exhibiendo un comportamiento social ajustado. En general, no exhibe cambios significativos en cuanto a su intensidad emocional al relatar los hechos materia de investigación, aportando con un relato fluido, espontáneo, coherente y con gran cantidad de detalles, no obstante, acusa presenciar de sintomatología de activación al evocar vivencias. Persiste en él una sintomatología ansiosa y depresiva aislada, además de signos de trastorno de estrés postraumático. Desde el punto de vista médico existe concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas y crónicas con las alegaciones de abuso. No presenta lesiones físicas traumáticas ni cicatrices relacionadas con los alegatos de tortura. Sin embargo, existiría concordancia entre los hallazgos del examen global y las alegaciones de malos tratos.

2) Miguel Ángel Ruiz Henríquez, actualmente de 74 años de edad, estuvo privado de libertad a lo menos por cuatro meses entre septiembre de 1973 y enero de 1974.



Foja: 1

Desde la perspectiva psicológica, impresiona con juicio y sentido de la realidad conservado, distinguiendo apropiadamente fantasía de realidad externa y objetiva, descartándose la presencia de delirios y alucinaciones e indicadores de un posible deterioro orgánico. Presenta sintomatología ansiosa y depresiva, además de signos de trastorno de estrés post traumático, la cual tiende a reactivarse al exponerse a estímulos que le recuerden las vivencias de tortura. Desde el punto de vista médico existe concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas y crónicas con las alegaciones de abuso. No presenta lesiones físicas traumáticas ni cicatrices relacionadas con los alegatos de tortura. Sin embargo, existiría concordancia entre los hallazgos del examen global y las alegaciones de malos tratos.

3) Rolando Jacobo Neira Gavilán, actualmente de 79 años de edad, estuvo detenido, a lo menos, por diez meses entre septiembre de 1973 a julio de 1974.

Desde la perspectiva psicológica, no presenta elementos psicóticos, aunque se advierten fallas en la memoria de fijación y memoria de largo plazo. Al relatar hechos ligados con la investigación aparece angustia, distraibilidad, fallas en la concentración y labilidad emocional, produciéndosele un quiebre del que le cuesta recuperarse. El informe concluye que el Sr. Neira presenta un estrés post traumático secundario a los hechos motivos de investigación, interfiriendo significativamente en su vida académica, afectiva y percepción de sí mismo. Agrega que los recursos personales y en especial su capacidad resiliente, le han permitido afrontar positivamente su vida y reconstruirse física y emocionalmente. Requiere un trabajo terapéutico para aliviar su sobrecarga a nivel emocional.

4) Jovino Guala Sánchez, actualmente de 89 años de edad, estuvo privado de libertad a lo menos por cuatro meses entre septiembre de 1973 y enero de 1974.

Desde la perspectiva psicológica, impresiona con juicio y sentido de la realidad conservado, distinguiendo apropiadamente fantasía de realidad externa y objetiva, descartándose la presencia de delirios y alucinaciones e indicadores de un posible deterioro orgánico. Presenta sintomatología ansiosa y depresiva aislada, además de signos de trastorno de estrés post traumático, la cual tiende a reactivarse al exponerse a estímulos que le recuerden las vivencias de tortura, constatándose malestar a partir de las experiencias que relata. Desde el punto de vista médico existe concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas y crónicas con las alegaciones de abuso. No presenta lesiones físicas traumáticas ni cicatrices relacionadas con los alegatos de tortura. Sin embargo, existiría concordancia entre los hallazgos del examen global y las alegaciones de malos tratos.



Foja: 1

5) Antonio Rafael Bianchi Panicucci, actualmente de 83 años de edad, estuvo privado de libertad a lo menos por cuatro meses entre septiembre de 1973 y enero de 1974.

Desde la perspectiva psicológica, presenta un juicio de realidad conservado, distinguiendo entre fantasía y realidad, descartándose la presencia de delirios y alucinaciones e indicadores de un posible deterioro orgánico. No presenta sintomatología como resultado de las experiencias de tortura relatada, debido a conducta de evitación como mecanismo de defensa para mantener equilibrio emocional. No obstante, reporta con aparición posterior al periodo de detención y reclusión síntomas consistentes con un trastorno por estrés agudo. Desde el punto de vista médico existe concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas y crónicas con las alegaciones de abuso. No presenta lesiones físicas traumáticas ni cicatrices relacionadas con los alegatos de tortura. Sin embargo, existiría concordancia entre los hallazgos del examen global y las alegaciones de malos tratos.

6) Liborio Barrientos Oyarzún, actualmente de 83 años de edad, estuvo detenido, a lo menos, por diez meses entre septiembre de 1973 a julio de 1974.

Desde la perspectiva psicológica, presenta un juicio de realidad conservado, distinguiendo entre fantasía y realidad, descartándose la presencia de delirios y alucinaciones e indicadores de un posible deterioro orgánico. Presenta sintomatología ansiosa y depresiva aislada, además de signos aislados de trastorno de estrés post traumático, que no logran configurar un cuadro clínico. Desde el punto de vista médico existe concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas y crónicas con las alegaciones de abuso. Presenta cicatrices relacionadas con los alegatos de tortura. Existiría concordancia entre los hallazgos del examen global y las alegaciones de malos tratos.

7) Sergio Alfonso Barriá Barriá, actualmente de 78 años de edad, estuvo detenido, a lo menos por tres meses entre septiembre y diciembre de 1973.

Desde la perspectiva psicológica, presenta un juicio de realidad conservado, distinguiendo entre fantasía y realidad, descartándose la presencia de delirios y alucinaciones e indicadores de un posible deterioro orgánico. Ausencia de un cuadro clínico como resultado de las experiencias de tortura que relata. No obstante, las pruebas revelan síntomas de evitación, ya sea de actividades, pensamientos y sentimientos que le recuerden las experiencias de vida relatadas en torno al periodo de detención y reclusión. Desde el punto de vista médico existe concordancia entre la historia de síntomas físicos e incapacidades agudas y crónicas con las alegaciones de abuso. No presenta lesiones físicas traumáticas ni cicatrices relacionadas con los alegatos de tortura. Sin embargo, existiría



Foja: 1

concordancia entre los hallazgos del examen global y las alegaciones de malos tratos.

8) Héctor Manuel Vera Cárdenas, actualmente de 74 años de edad, estuvo privado de libertad a lo menos por cuatro meses entre septiembre de 1973 y enero de 1974.

Desde la perspectiva psicológica, no presenta alteraciones en los procesos ni en los contenidos del pensamiento, reflejando un juicio de realidad conservado, pese a fallas leves de memoria. La afectividad aparece suficientemente regulada, aunque en ocasiones se muestra afectado emocionalmente al relatar elementos asociados con la causa judicial. Concluye que el Sr. Vera presenta sintomatología concordante con un estrés postraumático asociado a los hechos de investigación, caracterizado por una mayor reactividad, recuerdos intrusivos, malestar psicológico, evitación persistente de los estímulos asociados al suceso, alteración de su estado de ánimo, entre otros, lo cual le significó una alteración significativa en todos los ámbitos de funcionamiento, condición que superó sin tratamiento especializado.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, conforme a los antecedentes psicológicos reseñados anteriormente, los cuales en su conjunto dan cuenta fehaciente de los trastornos y patologías psíquicas que afectan a cada uno de los actores, fundamentalmente como consecuencia de detención y privación de libertad por parte de agentes del Estado, circunstancias que además han sido refrendadas por los certificados de visita a los centros de detención en que permanecieron todos ellos, así como el desarraigo de sus familias, y presumiblemente de todo su entorno, incluso respecto del actor Gonzalez hasta el exilio y prohibición de regresar al país, no cabe sino dar lugar a la acción indemnizatoria, aunque no por las sumas reclamadas en el libelo de demanda, pues como se dijo, la evaluación debe efectuarse a la luz de los antecedentes concretos que obran en la carpeta electrónica, los cuales fueron ponderados por esta juez previo al establecimiento de la premisa fáctica.

Sin perjuicio de lo anterior, tal como se dijo con anterioridad, de acuerdo al documento acompañado a los autos emitido por el Instituto de Previsión Social, cada uno de los actores ha recibido diversas sumas de dinero por concepto de reparaciones pecuniarias de parte del estado y que fueron reseñadas en el motivo 11º, cantidades que si bien no constituyen una reparación integral como pretendía la demandada, dicho antecedente ha sido considerado por esta sentenciadora al momento de cuantificar el daño moral sufrido por el demandante.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, así las cosas, a la luz de los antecedentes que obran en la carpeta electrónica, especialmente, los informes emitidos por el Servicio Médico Legal que dan cuenta del nivel de daño psicológico que presenta cada uno de los actores, así como la cantidad de tiempo que se mantuvieron privados de libertad en recintos militares,



Foja: 1

factores que han sido analizados y sintetizados en el considerando 41º, esta sentenciadora estima regular dicha indemnización prudencialmente en las sumas que se dira en lo resolutivo, considerando además los beneficios que el Estado ha otorgado a cada uno de ellos como se dijo.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, atendido el carácter declarativo del proceso, las sumas ordenadas pagar sólo devengarán intereses y reajustes, una vez que se encuentre firme o ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que atendido el mérito de lo razonado anteriormente y el hecho que la demandada no controvertió sustancialmente los hechos, cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación del daño y de prescripción deducidas por la demandada;

II.- Que se **acoge parcialmente** la demanda de fecha 11 de agosto de 2020, debiendo el Fisco pagar a los actores, por concepto de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por daño moral, las siguientes cantidades de dinero:

- 1) Gonzalo Ananías González Vargas, \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos);
- 2) Miguel Ángel Ruiz Henríquez, \$35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos);
- 3) Rolando Jacobo Neira Gavilán, \$45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos);
- 4) Jovino Guala Sánchez, \$35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos);
- 5) Antonio Rafael Bianchi Panicucci, \$35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos);
- 6) Liborio Barrientos Oyarzún, \$45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos);
- 7) Sergio Alfonso Barría Barría, \$35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos);



«RIT»

Foja: 1

8) Héctor Manuel Vera Cárdenas, \$35.000.000.- (treinta y cinco millones de pesos).

III. – Que las sumas ordenadas pagar devengarán reajustes e intereses desde que el presente fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo.

IV.- Que se rechaza lo pedido en el numeral II del petitorio de la demanda, conforme a lo razonado en los motivos 38° 40°;

V.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese, consúltese si no se apelare.

**DECTADA POR DOÑA ROCIO PÉREZ GAMBOA, JUEZ
TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de Octubre de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YXLHXCXHJPX